



Universidad
de Alcalá

ABORTO DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. PASADO, PRESENTE Y POSIBLE FUTURO

**ABORTION FROM A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE. PAST, PRESENT AND
POSSIBLE FUTURE**

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D^ª CARMEN TORIBIO GONZÁLEZ

Dirigido por:

Dr. D. GUILLERMO ESCOBAR ROCA

Alcalá de Henares, a 10 de febrero de 2020



ABORTO DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. PASADO, PRESENTE Y POSIBLE FUTURO

**ABORTION FROM A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE. PAST,
PRESENT AND POSSIBLE FUTURE**

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D^a CARMEN TORIBIO GONZÁLEZ

Dirigido por:

Dr. D. GUILLERMO ESCOBAR ROCA

Alcalá de Henares, a 10 de febrero de 2020

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis en relación a la interrupción voluntaria del embarazo desde una perspectiva constitucional, teniendo en cuenta la LO 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo e intentando dar respuesta al Recurso esgrimido por el Partido Popular en 2010. Para ello, comenzaremos realizando un breve repaso a la historia de nuestro país concerniente a esta materia parándonos a analizar la Sentencia 53/1985, que dio lugar a una verdadera revolución en materia del aborto. Posteriormente, analizaremos el presente, con la LO 2/2010, sin dejar a un lado, para poder llevar a cabo un estudio completo, legislaciones de otros lugares como Europa o América. Finalmente, se llevará a cabo un estudio del Recurso de inconstitucionalidad N.º 4523-2010, y como conclusión, se intentará dar contestación y se establecerán unas pequeñas pinceladas de lo que puede llegar a ser la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en un futuro

PALABRAS CLAVE

Aborto; Interrupción; Vida; Recurso; “Nasciturus”; Mujer

ABSTRACT

This essay has as a goal making an analysis about the voluntary pregnancy interruption from constitutional perspective, in accordance with LO 2/2010 of 3rd of March of sexual and reproductive health and free will of pregnancy interruption and trying to give an answer to the appeal proposed by PP in 2010. For that reason, we will begin with a short review of the history of our country concerning the matter subject, stopping to analyze the sentence 53/1985 that gave rise to a true revolution in the abortion subject. Later on, we will analyze the present (LO 2/2010), without forgetting about other Laws such as the American or the European to be able to carry out a complete study.

Finally, we will study the unconstitutional appeal nº 4523/2010, to which we will try to find a respond and establishing some guidelines of what the voluntary pregnancy interruption regulation will be in the future.

KEY WORDS

Abortion; Interruption; Life; Appeal; “Nasciturus”; Woman

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. EVOLUCIÓN DEL ABORTO A LO LARGO DE LA HISTORIA. Especial referencia a la sentencia 53/1985, de 11 de abril.....	7
3. ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.....	18
3.1. Supuestos y condiciones en los que se admite la Interrupción Voluntaria del Embarazo.....	20
4. ABORTO EN EL DERECHO COMPARADO.....	24
4.1. Aborto en Europa.....	25
4.2. Aborto en Latinoamérica.....	27
5. EXAMEN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 4523-2010, EN RELACIÓN CON DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.....	29
5.1. Motivos del recurso.....	31
6. ¿FUTURA REGULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO? A modo de conclusiones, posible resolución del Tribunal Constitucional al Recuso.....	39
7. BIBLIOGRAFÍA.....	51

1.-INTRODUCCIÓN

Se entiende por Aborto aquella interrupción natural o provocada del desarrollo del feto durante el embarazo¹. Si analizamos esta definición, podemos observar que el aborto se puede producir de dos maneras, naturalmente o de forma provocada. MIRANDA LUCAS y COMAS amplían este concepto explicando que el aborto espontáneo es aquel provocado de forma natural pudiendo ser completo o incompleto, dependiendo de si se expulsa total o parcialmente. En referencia al producido de forma provocada, se considera aborto voluntario, que en términos jurídicos es lo que llamamos, interrupción voluntaria del embarazo (IVE)². Si bien la primera no crea ningún tipo de controversia, la segunda no ha estado exenta de ella desde el famoso proyecto de ley que reformaba el artículo 417 bis del Código Penal.

Aunque ha sido objeto de conflicto durante todos estos años, se ha visto acrecentado con el auge del movimiento feminista y con los cambios sociales e ideológicos, además de con el más que discutido recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular en 2010 durante el gobierno socialista.

Existe gran diversidad de opiniones al respecto, desde los que rechazan el aborto justificándose en el importantísimo derecho a la vida, como los que protegen el derecho a la persona y dignidad de la mujer y estudian el hecho de que el feto no es un ser de vida.

Está diversidad de pensamientos se debe, siguiendo la línea de LANDROVE DÍAZ, a la existencia de diversas posturas ideológicas en torno a este concepto, encontrándonos:

- La postura conservadora extrema, la cual no contempla en ningún caso la despenalización del aborto.
- La postura conservadora moderada que sigue sin despenalizar el aborto en ningún caso pero da algunas indicaciones en los casos de la interrupción terapéutica, ética y eugenésica.
- La solución intermedia, en la que se encontraría la ley de 1985 que comentaremos con posterioridad, despenalizando la interrupción del embarazo en determinados supuestos.

¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.2 en línea]. <https://dle.rae.es>

² MIRANDA LUCAS, MARÍA JOSÉ; COMAS D'ARGEMIR, DOLORS: "Discursos de profesionales de la salud y de mujeres sobre el aborto voluntario". *Revista de Bioética y derecho*, 2016, Núm. 38. Pág. 39.

- La opción liberal, situación actual en España, que legaliza el aborto y se basa en un sistema de plazos.³

Pues bien, durante el desarrollo de este trabajo analizaremos el desarrollo de las diversas posturas y de la protección de los derechos humanos a través de las dos leyes relacionadas con el aborto que se han dado en nuestro país, las mencionadas ley de 1985 y ley de 2010.

Para ello comenzaremos haciendo un breve repaso a lo largo de nuestra historia y parándonos a comentar, como no podría ser de otra manera, la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril de 1985.

Posteriormente, llegaremos a la actualidad analizando la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y haciendo un exhaustivo análisis del recurso de inconstitucionalidad Nº 4523-2010 de esta ley, propuesto por el Partido Popular.

Además, desarrollaremos las posturas mencionadas adentrándonos en los sistemas jurídicos de otros países tales como Europa o Latinoamérica, estudiando la regulación relativa al aborto y comparándola con nuestro sistema, conociendo así las diversas opciones posibles que se pueden dar frente a este tema.

Finalmente, a modo de conclusión, se cuestionará el futuro del aborto, y se intentará resolver el famoso recurso optando por una solución eficaz y respetando los derechos contemplados en nuestra Constitución Española.

2.- EVOLUCIÓN DEL ABORTO A LO LARGO DE LA HISTORIA. Especial referencia a la sentencia 53/1985, de 11 de abril.

Lo primero que hay que tener en cuenta para poder hablar de la interrupción voluntaria del embarazo son sus antecedentes históricos.

Desde el comienzo de la Codificación, según CAPODIFERRO, y hasta 1985, influenciado sobre todo por la religión católica, existía un sistema de prohibición del aborto estableciéndolo como un delito de homicidio, al entender que se trataba de un atentado al derecho a la vida. Bien es cierto que no era una pena absoluta, ya que por aquel entonces seguían existiendo las mismas dudas que las actuales, al no saber si

³ Siguiendo la tesis de ANTON VIVES: LANDROVE DÍAZ, GERARDO "La tímida despenalización del aborto en España" *Estudios penales y criminológicos*, Nº. 10, 1985-1986, págs. 187-230

considerar al feto realmente como persona o no, por lo que se estableció una graduación de la pena dependiendo del grado de desarrollo y del estado del embarazo⁴.

Sin embargo, antes de adentrarnos en 1985, existe una excepción, la única en todo ese periodo, de esta regulación prohibitiva, y es la dada durante el periodo de la Segunda República. En líneas generales, el Código Penal de 1932 dedicaba el capítulo III de su Título IX e introducía un nuevo tipo legal, el aborto imprudente en su artículo 417⁵ y además, despenalizaba el aborto violento no intencionado⁶.

En Cataluña, no sólo no se castigaba el aborto violento no intencionado, sino que se dejó de penar mediante el Decreto de Regulación de la Interrupción Artificial del Embarazo, de 25 de diciembre de 1936. En él, la interrupción voluntaria del embarazo se realizaba por motivos de salud pública o por razones eugenésicas⁷. Se pretendía, según dice el propio texto *"Acabar con el oprobio de los abortos clandestinos, fuente de mortandad maternal, para que la interrupción del embarazo pase a ser un instrumento al servicio de los intereses de la raza y efectuado por aquellos que tengan solvencia científica y autorización legal para realizarlo"*⁸. Este Decreto fue derogado al final de la Guerra Civil.

A partir de ese momento y hasta 1983, el aborto vuelve a ser penado en todos sus aspectos. Pero con la llegada de la democracia y el ascenso del Partido Socialista Obrero Español, en ese mismo año, se tramita, en primer lugar, un Proyecto de Reforma parcial y urgente del Código Penal que termina con la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal., y en segundo lugar, un Proyecto de Reforma

⁴ CAPODIFERRO CUBERO, DANIEL "La evolución de la regulación del aborto en España: perspectivas teóricas y proyección normativa". *Anuario da Facultade de Dereito da UDC (AFDUDC)*. Vol. 20 (2016). Págs 81-82.

⁵ "Artículo 417. *El que de propósito causare un aborto será castigado: 1. Con la pena de prisión mayor si, ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada. 2. Con la pena de prisión menor si, aunque no lo ejerciera obrase sin consentimiento de la mujer. 3. Con la de arresto mayor si la mujer lo consintiera. Cuando, a consecuencia del aborto, resultare la muerte de la mujer embarazada, se impondrán las penas respectivas en su grado máximo, siempre que hubiese mediado imprudencia y no correspondiere mayor pena conforme al artículo 558, que reguló la imprudencia temeraria*". Código Penal de 1932

⁶ UMAÑA ALVARADO, TATIANA REBECA. *"La necesaria despenalización del aborto voluntario"*. Tesis doctoral. Departamento de Ciencias Jurídicas. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. 2016. Pág. 28-29.

⁷ RUIZ SALGUERO, MAGDA TERESA "La regulación de la fecundidad: un estudio demográfico de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y el tratamiento de la esterilidad en España". *Universitat Autònoma de Barcelona. Centro de Estudios Demográficos. Bellaterra, marzo de 2.002*. Págs. 61-62

⁸ Decreto de Regulación de la Interrupción Artificial del Embarazo, de 25 de diciembre de 1936, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 9, el sábado 9 de enero de 1937

independiente en relación al artículo 417 bis del Código Penal y a la despenalización el aborto en determinados supuestos⁹.

El mencionado proyecto de Ley establecía que:

“1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.”¹⁰

Es decir, resumiendo este precepto, se puede decir que se va a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: indicación terapéutica, indicación ética e indicación eugenésica, respectivamente.

⁹ DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS “La reforma penal española de 1983”. (Informe). *Nuevo Foro Penal*, 12(27), Págs. 62-65

¹⁰ Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis CP de 1983

Sin embargo, no fue una decisión aplaudida por todos, y ese mismo año, antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la misma, Don José María Ruíz Gallardón interpuso un recurso previo de inconstitucionalidad, comisionado por 54 diputados, contra el texto definitivo de este Proyecto de Ley, por infracción de los artículos 1.1, 9.3, 10.2, 15, 39.2 y 44 y 53.1 y 3 de la Constitución. Pretendían la inconstitucionalidad total del proyecto, y en el caso de no ser posible, la inconstitucionalidad parcial de las circunstancias b) y c) del artículo, que como hemos dicho hacían referencia a la indicación ética y eugenésica. Recurso que fue contestado por el Abogado del Estado y que terminó con la famosa Sentencia de 11 de abril de 1985.

En este recurso de inconstitucionalidad se planteaban varias cosas, que como veremos más adelante, no distan mucho de las estipuladas en el famoso recurso de 2010.

En primer lugar, los tres primeros motivos de inconstitucionalidad se basan en el derecho a la vida previsto en el artículo 15 de nuestra Constitución, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el resto de Tratados que versan sobre esta materia.

Antes de comenzar a analizar estos motivos, hay que saber que se entiende por el comienzo de vida humana. No se puede determinar este concepto, ya que, a lo largo de la historia, se han ido dando varios momentos. Así lo predica RUANO, que muestra diversas teorías al respecto. Algunas de ellas establecen que el comienzo de la vida humana empieza desde el momento de la fecundación, otras desde la anidación, pasando por las que señalan que la vida humana comienza cuando se tiene la capacidad de vivir fuera del seno materno. Hay teorías incluso que señalan el comienzo cuando los padres lo aceptan¹¹.

En relación con el párrafo anterior, podemos observar que el derecho a la vida siempre ha sido muy cuestionado al no poder delimitar dicho término. Y es por ello que lo más discutido inicialmente es la primera parte del artículo 15 de la Constitución que decreta que *“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”*.

Se puede ver que en el propio precepto se establece la palabra “todos”, por lo que los recurrentes alegaron que, al instaurarse este palabro, se refería también a los no nacidos, en concreto a toda vida desde el momento de la concepción, y que, desde ese momento,

¹¹ RUANO ESPINA, LOURDES “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985 sobre despenalización de algunos casos de aborto”. *Ius canonicum*, Vol. 25, Núm. 50, 1985, Pág. 669

debían tener protección¹². Estos hechos los justificaban de diversas maneras. En primer lugar, se apoyaban en sentencias de tribunales de otros países tales como el alemán que decía que existía vida humana a partir de los catorce días de la concepción¹³. Por otro lado, acudían a la historia, la cual, como hemos visto, penalizaba el aborto a excepción del caso de Cataluña, y además recurrían a la enmienda que se llevó a cabo del precepto, por la cual, reiterándonos en lo mencionado al inicio del párrafo, se eliminaba el concepto “todas las personas” a “todos”¹⁴.

Estos motivos se daban en relación al artículo 15 de la Constitución, sin embargo, también alegaban el Estado Social y de Derecho previsto en el artículo 1¹⁵ del mismo texto legal, y explicaban que la despenalización de estos supuestos no podía ser compatible con el Estado Social por desproteger un derecho fundamental como es la vida.

Por último, hacían referencia a los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, y el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966. En ellos, al igual que en nuestro texto legal, se utilizaba la palabra “todos”, y no se discutía en ningún momento sobre la despenalización del aborto.

¹² VIVES ANTÓN lo explica diciendo que: *“la misma conclusión de entender que el nasciturus es titular del derecho a la vida proclamado en el artículo 15 de la Constitución se llega, según los recurrentes, si se relaciona su texto con la realidad social del momento en que ha de ser aplicado, a la que se hace referencia en el artículo 3.1 del Código Civil. En tal sentido, aluden, de una parte, a los valores éticos subyacentes a las normas jurídicas, invocando manifestaciones de diversos organismos y, en particular, de varias confesiones religiosas y, de otra, a una tendencia internacional a reconsiderar el problema en los países que, en su día, adoptaron una legislación despenalizadora. El derecho a la vida del nasciturus implica una protección penal de la que el proyecto impugnado le priva”*. VIVES ANTÓN, TOMÁS SALVADOR., CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA., *“El debate acerca de la legalización del aborto”*. Tirant lo Blanch. Febrero 2012.

¹³ Según la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 25 de febrero de 1975, mencionada en la Sentencia examinada, va a existir vida humana, en el sentido de existencia histórica de un individuo humano, desde los catorce días después de la concepción; por ello, la protección no puede limitarse al hombre ya nacido, ni al nasciturus susceptible de vida independiente.

¹⁴ Este punto siempre fue muy discutido en el momento de elaborar nuestra Constitución. Desde el momento en que se puso el concepto “todos”, hubo dos posturas totalmente opuestas. Se encontraba, en primer lugar y a la que hacen referencia la parte recurrente, la postura que afirmaba que al poner “todos”, se incluía a los no nacidos, al nasciturus, y la segunda, que establecía que utilizar ese concepto evitaba confusiones relativas a una futura despenalización del aborto (postura llevada, como veremos, por el abogado del Estado). Siguiendo la sinopsis del artículo 15 realizada por Luis Gálvez Muñoz y actualizada por Ángeles González Escudero, en la página web del Congreso de los Diputados: <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=15&tipo=2>

¹⁵ Artículo 1 *“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”*. Constitución Española

Frente a estos tres primeros motivos, que engloban el derecho a la vida, el abogado del Estado respondió alegando, en un primer momento, que este derecho y la vida en gestación seguía estando protegida por nuestra legislación y que lo único que se hacía era despenalizar de manera excepcional determinados supuestos, no queriendo realizar una interpretación del artículo 15, tal y como se pretendía alegar en el recurso, sino exceptuando situaciones no habituales.

Se apoyaba en que la palabra “todos”, al contrario de lo que estimaban los recurrentes, se refería a sujetos que tuviesen titularidad jurídica, siendo conscientes de la dificultad de delimitar este término. Además, se añadía que la enmienda mencionada no estaba ligada en ningún caso con la cuestión aquí discutida, no restringiendo en ningún momento la posible despenalización del aborto, y concretando además la posibilidad de poder hacerlo.

Por otro lado, en relación a lo legislado a lo largo de la historia, explican la necesidad de innovar y avanzar poniendo como ejemplo la citada enmienda, cuestión relacionada con lo dispuesto en los diversos Tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos en la cual no se intentaba proteger al no nacido de manera absoluta, sino que era una norma compatible con la legalización del aborto y por la cual se pretendía proteger las garantías y derechos de la mujer embarazada ¹⁶, que lejos de darles la razón a los recurrentes, confirman la posibilidad de despenalizar el aborto en determinadas ocasiones sin dar ninguna explicación más al respecto.

Finalmente, en cuanto al motivo referente al artículo 1 de la Constitución, el Abogado del Estado confirmaba que la gestación es una materia protegible dentro del Ámbito del Estado Social, y que solo se producirá esa desprotección de la que hablan los recurrentes en el caso de que venga expresamente contemplada la prohibición de tal conducta en la Carta Magna, como es el caso de la pena de muerte.

Ahora bien, estos no son los únicos motivos alegados por el grupo de recurrentes. Como cuarto motivo apelan a la vulneración del artículo 39.2 y 4 CE.

El apartado segundo de dicho artículo contempla una protección integral de los hijos de manera igual por parte del padre y de la madre¹⁷. Por ello, la parte recurrente apelaba a la

¹⁶ SAURA ESTAPÀ, JAUME “El estándar jurídico internacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo: reflexiones en perspectiva de derechos humanos”. *Revista electrónica de estudios internacionales*. Núm.29. Junio 2015. Pág.7

¹⁷ Artículo 39.2 “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad”. Constitución Española

vulneración de dicho apartado con la falta de intervención de la figura paterna, todo ello porque, en primer lugar, existía una falta de consentimiento del mismo, lo que implicaba una desigualdad de los cónyuges y porque existía a su vez, una desigualdad de hijos nacidos y no nacidos.

En relación al apartado cuarto, se establece una protección integral de los niños prevista en los tratados internacionales que velan por sus derechos. Por lo que, al igual que con el apartado anterior, existiría una vulneración al no proteger al nasciturus.

Sin embargo, con buen ojo, la parte contraria afirmaba que no tenía sentido que en los supuestos que se pretendían despenalizar cupiese el consentimiento del padre, ya que por ejemplo en el caso del aborto ético, habría que pedir el consentimiento del violador, o en el aborto terapéutico, se trata de una cuestión entre la concepción y la madre, sin que tenga por qué influir ningún otro factor. A todo esto, explicaba que la protección de hijos, como hemos visto prevista en el artículo 39.4, estaba ligada a la noción de persona por lo que los hijos tenían que haber nacido. Concluía así diciendo que *“si la posibilidad del aborto en determinados casos se basa en la no exigibilidad de otra conducta por parte de la madre, pese al sacrificio que ello supone del bien jurídico que es la vida en formación, con mayor razón prevalecerá aquella no exigibilidad frente a los eventuales derechos del padre, que sólo asumirían, en su caso, un significado instrumental y supeditado a dicho bien jurídico”*¹⁸.

El quinto de los motivos es el referido a la discutida vulneración del artículo 53 de la Constitución Española referente a la vinculación de todos los poderes públicos. Los recurrentes hacían referencia a las garantías que en él se inscribían en relación a los Derechos fundamentales y Libertades previsto en los arts. 14 a 32 de la Carta Magna.

En primer lugar, concretaban que el derecho a la vida, incluido en ese intervalo de derechos fundamentales, era un derecho que tenían “todos” (volviendo, como ya hemos visto antes, a hacer referencia a este término tan discutido), y que, por tanto, en él se incluían los nasciturus.

Por ende, era un derecho que vinculaba a todos los poderes públicos y que no se podía dejar en manos de la voluntad de la madre. Además, recordaban que se trata de un derecho con reserva de Ley Orgánica y protegido por un procedimiento especial, preferente y

¹⁸ SENTENCIA 53/1985, de 11 de abril

Sumario, por el amparo constitucional. Alegaban que todas estas garantías constitucionales se estaban vulnerando por el proyecto de la despenalización.

A todo ello, el abogado del Estado contestaba de la misma manera que a las alegaciones anteriores, exclamando que no podían hacer una equiparación absoluta del feto con la persona nacida, al no tener ningún fundamento ni en la Constitución ni en el resto de ordenamiento jurídico. Es decir, el nasciturus no entraría a formar parte de la protección prevista en este artículo 53.

Junto con este motivo, podemos enlazar el sexto, relativo a las indicaciones por las que se despenaliza el aborto, es decir, los motivos por los que se redacta la ley.

El primero de ellos era el aborto terapéutico, que como ya explicábamos antes, se realizaría en el caso de que se produjese un grave peligro para la madre o para el feto. Sin embargo, la parte recurrente veía totalmente innecesario la despenalización de este tipo, en primer lugar, porque no era frecuente que se produjese este tipo de situaciones debido a los grandes avances médicos, y, en segundo lugar, al considerar que se podía equiparar al Estado de Necesidad, es decir, que en el caso de que la madre abortara, se podría considerar una eximente.

Esta tesis fue apoyada por RUANO, que explicaba que es un concepto muy vago con diversas interpretaciones al no poder acotar el concepto “gravedad”, así pone el ejemplo de una mujer que quiera suicidarse y esté embarazada, en ese caso no se podría saber si estaría integrado en este supuesto al suponer un grave perjuicio para el bebé o no¹⁹.

A este respecto, el Abogado del Estado se reitera en lo ya mencionado anteriormente, al expresar que aun siendo pocos los casos dados, no evita la razón de ser del precepto y mucho menos hace efectiva la inconstitucionalidad.

No conformes con esto, en relación al aborto ético, aquel que se puede dar en el caso de que el embarazo se haya producido por una violación, aplicaban una vulneración del artículo 15 de la Constitución al existir una prevalencia del derecho al honor sobre el derecho a la vida, y, además, una vulneración del apartado segundo del artículo 39 al desproteger totalmente al no nacido. A su vez, siguiendo la línea argumentativa de RUANO, decía que para que existiese violación, tendría que existir una sentencia firme que así lo declarase, sin embargo, eso supondría más de 12 semanas, que son el límite

¹⁹ RUANO ESPINA, LOURDES. “Comentario...”, op, cit, p. 695

para poder abortar, por lo que está indicación estaría basada únicamente en el testimonio de la mujer sin ningún otro tipo de prueba.²⁰

Al igual que con el primer supuesto, el Abogado del Estado hace referencia a la no prevalencia del derecho al honor frente al derecho a la vida explicando que la no necesidad de continuar con el embarazo por un hecho indeseado. Y además, en el caso de que existiese sentencia firme que demostrase la inexistencia del hecho delictivo, la violación, estaríamos ante un delito independiente que podría imputársele a la madre.

Finalmente, en relación al tercer supuesto, el aborto eugenésico, para los recurrentes también supone una vulneración del artículo 15 y 49 de la Constitución. Así, RUANO afirma que no es lógico que se tenga un margen de 22 semanas cuando las pruebas para diagnosticar un grave perjuicio del bebé se obtendrían antes.²¹

Al contrario de todo esto, el Abogado del Estado enlaza con el fundamento del supuesto anterior al evitar el sufrimiento de una mujer que no puede soportarlo psicológicamente.

Y, por último, llegamos al séptimo motivo alegado por los recurrentes para hacer inconstitucional este precepto. En él se alegaba la vulneración el artículo 9.2 de la Constitución debido a supuestas “*ambigüedades constitucionales*” al *limitarse a despenalizar el aborto, pero sin incluir previsión alguna sobre las consecuencias que la modificación por él introducida origina en otros campos jurídicos, como el civil, el laboral, el administrativo, el procesal o el de la seguridad social.*²² Como ejemplo, ponen entre otros, la no especificación de la “gravedad” del peligro que supone para la madre el embarazo o la no concreción del término violación.

En respuesta a ello, el abogado del Estado dio respuesta a cada supuesto controvertido.

Como consecuencia de todos estos motivos, el Tribunal Constitucional, después de exponer en sus razonamientos jurídicos el gran conflicto existente entre derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, entre otros, y los cuales no vamos a desarrollar al ya estar explicados anteriormente en los fundamentos de hechos de ambas partes, declara que *el proyecto de Ley Orgánica por el que se introduce el art. 417 bis del Código Penal es disconforme con la Constitución, no en razón de los*

²⁰ RUANO ESPINA, LOURDES. “Comentario...”, op,cit,p. 695-696

²¹ RUANO ESPINA, LOURDES. “Comentario...”, op,cit,p. 696-697

²² SENTENCIA 53/1985, de 11 de abril

supuestos en que declara no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del art. 15 de la Constitución, que resulta por ello vulnerado, en los términos y con el alcance que se expresan en el fundamento jurídico 12 de la presente Sentencia.

Este famoso fundamento 12 de la sentencia hace referencia a la delimitación del ámbito de protección penal de los derechos del nasciturus al quedar excluido por los derechos de la mujer. Por lo que el tribunal intenta comprobar si el artículo 417 bis del CP desprotege de alguna manera el derecho a la vida al intentar proteger los derechos de la mujer, ya que, tal y como se menciona a lo largo del resto de fundamentos jurídicos, el Estado es el que tiene que garantizar el derecho a la vida, incluso el del no nacido. Así pues, se expresa una profunda preocupación al no saber si la no punibilidad de determinadas conductas mediante los medios explicados en el precepto del código penal, son garantía suficientes para la protección de lo dispuesto en el artículo 15 de nuestra Carta Magna.

Por tanto, aunque parezca confuso, el fallo de la sentencia es favorable a la modificación del precepto penal y la despenalización del aborto en determinados supuestos.

Por ello y de acuerdo al artículo 79.4.b) LOTC²³, presenta modificaciones que harían constitucional el discutido precepto²⁴.

Pese a este fallo, seis de los Magistrados, don Jerónimo Arozamena Sierra, don Luis Díez-Picazo, don Francisco Tomás y Valiente, don Ángel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo y don Francisco Rubio Llorente formulan voto particular al no estar de acuerdo con el fallo. De manera sucinta, decir que el mayor argumento dado por todos es la invasión de facultades del Tribunal frente al legislador.

Según ellos, el Artículo 79.4.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no establece lo dispuesto en la Sentencia. Tal y como lo establece el magistrado Tomás y Valiente *“el art. 79 de la LOTC, el mismo que creó fuera de la Constitución, el recurso*

²³ Art 79.4.b) *“Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá concretar ésta y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por el órgano competente”*. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

²⁴ Así el Tribunal establece, para poder alcanzar el objetivo, que *“el legislador puede adoptar cualquier solución dentro del marco constitucional, pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador, pero sí lo es, de acuerdo con el art. 79.4 b) de la LOTC, indicar las modificaciones que a su juicio -y sin excluir otras posibles- permitieran la prosecución de la tramitación del proyecto por el órgano competente”*.

previo de inconstitucionalidad, en su párrafo 4 b) (modelo de pésima redacción), impone dos deberes dirigidos a dos sujetos distintos. Al Tribunal le exige que, en su caso, concrete la inconstitucionalidad de la norma impugnada y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. Al otro sujeto - «el órgano competente»- le exige que para seguir la tramitación del proyecto suprima o modifique los preceptos, se entienda, declarados inconstitucionales. No puede interpretarse nunca, a mi juicio, que sea el Tribunal quien le indique al legislador qué modificaciones deben ser esas. De otro modo, es decir, si el Tribunal indicase las modificaciones a introducir, carecería de sentido el párrafo 5 del mismo art. 79 de la LOTC, puesto que si, según éste, «el pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal» en los recursos que pudieran interponerse contra la Ley ya corregida o modificada, es evidentemente porque tales modificaciones no han sido dictadas de modo vinculante por el Tribunal Constitucional”²⁵.

De acuerdo con esta tesis, y siguiendo lo dicho por Rubio Llorente, existe una vulneración de la separación de poderes, al actuar el Tribunal Constitucional como una “*tercera cámara*”, concepto erróneo e incompatible con la Constitución²⁶.

Con el fallo de la sentencia, y tres meses después, se aprueba la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal.

En 1995, durante el gobierno de Felipe González, se propuso una modificación en la ley incorporando una cuarta indicación que implicaba la interrupción voluntaria del embarazo cuando supusiera un conflicto personal, familiar o social para la mujer²⁷. Sin embargo, no salió adelante, por lo que la ley de 1985 se ha mantenido hasta la actual, utilizándose en cierto modo como un sistema de plazos, que pasaremos a analizar a continuación.

²⁵ TOMÁS Y VALIENTE, FRANCISCO. Voto Particular. SENTENCIA 53/1985, de 11 de abril

²⁶ Francisco Rubio Llorente afirma que “*vulnera así el principio de separación de poderes, inherente a la idea de Estado de Derecho y opera como si el Tribunal Constitucional fuese una especie de tercera Cámara, con facultades para resolver sobre el contenido ético o la oportunidad política de las normas aprobadas por las Cortes Generales. Es cierto que esta errónea concepción de la jurisdicción constitucional parece muy extendida en nuestra sociedad; que precisamente con motivo de este recurso se han expresado en la prensa multitud de opiniones que implícita o explícitamente partían del supuesto de que el fundamento de nuestra Sentencia había de ser el juicio sobre la licitud o ilicitud ética del aborto, o la conveniencia de su despenalización, y que (y ello es aún más penoso) destacadas figuras políticas, e incluso miembros del Gobierno, han efectuado declaraciones que manifiestamente arrancaban del mismo convencimiento. Es evidente, sin embargo, que por difundida que esté, tal idea es errónea e incompatible con nuestra Constitución y con los principios que le sirven de base*”. Voto Particular STC 53/1985

²⁷ Siguiendo lo dispuesto por Ana Martín Plaza el 18 de febrero de 2015 en RTVE:

<http://www.rtve.es/noticias/20150218/leyes-del-aborto-espana-ley-supuestos-1985-plazos-2010/828240.shtml>

3.- ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

La sexualidad, junto con la capacidad de crear vida, son hechos totalmente personales e íntimos, que afectan de manera significativa a la mujer. Así se estableció en el Preámbulo de esta ley al decir que el desarrollo de la sexualidad y la posibilidad de tener hijos están intimamente ligados al derecho de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la mujer por lo que gozan de la protección correspondiente a los derechos fundamentales.

Por ello, y siguiendo las pautas del derecho internacional²⁸, se pretendía, de alguna manera, proteger los derechos fundamentales vinculados a estos acontecimientos, así como educar a los más jóvenes en estos ámbitos y prevenir tanto las enfermedades, como los abortos y los embarazos no deseados.

Esta ley entró en vigor el 5 de julio de 2010, y aunque supuso una gran revolución al modificar el tratamiento que se daba a este tipo de legislación, al dejar a un lado la relación de estos supuestos con el concepto “delito”, y pasar a regular de manera concisa la protección de los derechos fundamentales antes mencionados tales como la salud sexual y reproductiva²⁹, también supuso la oposición de muchos, como veremos más adelante.

Antes de pasar a analizarla mencionar las posiciones mantenidas por los diversos grupos políticos. Así, en el debate de iniciativas legislativas del 26 de diciembre de 2009 se expusieron las posturas por las que tenía que promulgarse o no la mencionada ley. Comenzó hablando la Ministra de Igualdad del partido socialista, explicando la necesidad de crear una ley como consecuencia del incremento de embarazos no deseados y por ende un mayor número de abortos. La ley vigente del momento, la de 1985, se encuentra

²⁸ Así, en el preámbulo de la ley, se hace mención a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, establece en su artículo 12 que «*Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar*». Además de ésta, hace referencia a la Plataforma de Acción de Beijing sobre la mujer en la que se establece que «*los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia*». No se olvida de la Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados aprobada por el Parlamento Europeo y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 que impone una obligación de respetar la decisión de las personas con discapacidad del número de hijos que quieren tener, así como a tener acceso a información y educación en este tema.

²⁹ CAPODIFERRO CUBERO, DANIEL “La evolución...” ,op,cit,p 87-88

desfasada y lo que se pretende es evitar la continua vulneración de los derechos de la mujer, sobre todo el derecho a la dignidad y desarrollo de la personalidad (que luego veremos su inmensa importancia) junto con la libertad de las mismas, así como ponerse al día de numerosas legislaciones europeas que permiten el aborto y responder por tanto a las necesidades reales de la ciudadanía, al considerar este como un verdadero problema. De tal manera, que la ley cubría las políticas públicas en materia sanitaria y de educación en relación a este tema³⁰. Tanto los partidos Nafarroa Bai, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como el Bloque Nacionalista Galego dieron su apoyo a este proyecto votando en contra de las enmiendas formuladas por UPD y el Partido Popular (pedían la devolución del proyecto de ley).

En cuanto a lo dicho por el partido de Rosa Díez, UPD, afirmaba que esta ley era contraria a la igualdad al considerar que las mujeres necesitaban de una tutela especial y aseguraba que el proyecto de ley no resultaba más seguro jurídicamente sino que, al contrario introducía más confusión. En relación al aborto de menores de 16 y 17 años entendía que creaba un conflicto entre padres e hijas. Además de UPD, el Partido Popular consideraba que la ley no era más que un disfraz en el que se encontraba un aborto libre y que vulneraba el artículo 15 de la Constitución, derecho fundamental principal, conjuntamente con el derecho de libertad que tienen los profesionales sanitarios a la hora de objetar conciencia, una vulneración a lo dispuesto por la Declaración de los Derechos del Niño y se desprotegía a los menores de edad.

A estos grupos parlamentarios le fueron de apoyo el partido Unión del Pueblo Navarro y Unió Democràtica de Catalunya.

Finalmente, el Partido Nacionalista Vasco no estaba ni a favor de las enmiendas, ni a favor de la ley porque, dicho textualmente *“creemos que no es de esperar que una ley, por buena que sea, elimine el aborto, pero sí que reconozca derechos a las mujeres, proteja a las personas que se acojan a ella y a los profesionales que la aplican, mejore*

³⁰ La ministra Aído Almagro dijo *“Por eso pretendemos impulsar políticas públicas en el ámbito sanitario y educativo, mediante acciones informativas de sensibilización, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de formación de profesionales de la salud, de garantía de calidad y accesibilidad a los servicios de salud y planificación familiar, todo ello enmarcado en una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que el Gobierno tendrá que elaborar cada cinco años junto con las comunidades autónomas y con la colaboración de las sociedades científicas y organizaciones sociales. El título II del proyecto regula los requisitos y las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. Proponemos una regulación más segura que la vigente, más equilibrada, que garantizando la autonomía y la libertad de las mujeres no descuida la protección de la vida prenatal; una regulación que respeta los espacios de autonomía y libertad que nuestro Tribunal Constitucional nos ha marcado”* DEBATE.

la atención sanitaria y social, reduzca las inequidades y evite los abortos inseguros. En definitiva, que gestione bien el problema y el fracaso de la prevención que representa un embarazo no deseado. Por otra parte, toda legislación debe respetar la pluralidad de creencias que fundamenta la existencia de Estados laicos no confesionales, en los cuales no es posible impedir el acceso de las mujeres a la interrupción o continuación del embarazo basándose en determinadas creencias religiosas. No se trata de excluir las decisiones basadas en las creencias religiosas, sino de evitar que las ideas de una determinada creencia o religión se impongan a aquellos que no comparten tales convicciones. La aspiración de una sociedad más justa y humana no debe conformarse en desear que no haya abortos, y menos aún sin protección jurídica y sanitaria, no. Deseamos que no haya razones que lleven a una mujer a la dramática necesidad de interrumpir su embarazo. Ese es nuestro objetivo y lucharemos por ello”³¹.

Ahora ya adentrándonos en la ley propiamente dicha, tiene por objeto, según lo previsto en su artículo 1, garantizar los derechos fundamentales en relación a la salud sexual y reproductiva, así como regular la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las obligaciones que van a tener los poderes públicos.

La ley se encuentra dividida en un Título Preliminar, dos Títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

En relación al Título Primero, se divide en cuatro capítulos dedicados a desarrollar las políticas sanitarias (Capítulo II), educativas (Capítulo III) y sociales, no sin establecer los objetivos de los poderes públicos (artículo 5).

En cuanto al Título Segundo, se establecen en él las condiciones para la interrupción (Capítulo I) y de las garantías en el acceso a la prestación (Capítulo II).

3.1.- Supuestos y condiciones en los que se admite la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta ley introduce lo que conocemos como sistema de plazos.

Existen dos supuestos distintos por los que se puede interrumpir el embarazo; a petición de la mujer o por causas médicas.

³¹ Sesión plenaria núm. 119 celebrada el jueves 26 de noviembre de 2009

En el primer caso, de acuerdo con el artículo 14, se interrumpirá el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación (pese a las indicaciones del Informe del Consejo de Estado que pretendía limitarlas a 12 semanas para equipararse al resto de regulaciones europeas³²) siempre y cuando se haya informado a la misma de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, de acuerdo a los apartados 2º y 4º del artículo 17, y siempre que haya pasado un tiempo de al menos tres días desde que recibe la información o desde la intervención.

En el segundo de los casos, previsto en el artículo 15, el embarazo se va a poder interrumpir cuando:

- a) Exista un grave riesgo para la salud o vida de la mujer embarazada siempre que lo acredite un informe médico (cuando no exista un riesgo vital, en el caso de existir se podrá prescindir de él) distinto al que vaya a practicar o dirigir la intervención emitido antes de que se produzca la misma, con anterioridad a las 22 semanas de gestación.

Es lo que llamábamos, en puntos anteriores, aborto por indicación terapéutica.

- b) Exista un riesgo de graves anomalías en el feto según lo disponga un dictamen realizado por dos médicos diferentes a los que realizarán la intervención, siempre con anterioridad a la misma, y dentro de las veintidós primeras semanas de gestación.
- c) Se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida acreditadas en un dictamen emitido por un médico especialista con anterioridad a la intervención distinto al que la practique o dirija
- d) Se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico³³.

Estos tres últimos supuestos son los relativos al aborto eugenésico.

Ahora bien, en ambos supuestos, tanto el previsto en el artículo 14 como el previsto en el artículo 15, tienen que darse unas condiciones para que se pueda llevar a cabo el IVE. Según el artículo 13, estas son:

³² Informe del Consejo de Estado del 17 de noviembre de 2009.

³³ Según el artículo 16.1 de dicha ley, un comité médico será el formado por un equipo pluridisciplinar integrado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra.

- a) Que se practique o se realice bajo la dirección de un médico especialista
- b) Que se realice en un centro sanitario acreditado, ya sea público o privado
- c) Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, a excepción de lo dispuesto en el artículo 9.2 de dicha ley³⁴.

Y aquí es donde entramos en el primero de los problemas. Este mencionado precepto, en su redacción original, tenía un apartado cuarto que establecía que para el caso de las mujeres menores edad entre 16 y 17 años, podrían interrumpir voluntariamente el embarazo con el consentimiento exclusivo de ellas aplicándoles así el régimen legal de las mujeres mayores de edad. Además, a los padres o tutores legales solo les correspondería estar informados de la decisión de la menor, a excepción de que esa información provocase un conflicto grave³⁵.

Esto provocó una oleada de críticas al vulnerarse la protección de los menores que se establece en los Tratados internacionales y los deberes que tienen los padres o tutores legales para con los hijos de protegerlos y velar por ellos. Además, se encontraban los que pensaban que a esas edades todavía no se tenía capacidad intelectual plena, llevando la contrario de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la LO 4/2002, por el cual no se necesitaba consentimiento por representación una vez cumplidos los 16.

Según lo explicado por MILIONE, este tipo de aborto producía unos perjuicios negativos tales como el retraso a la hora de producir el aborto como consecuencia de la indecisión

³⁴ En el artículo 9.2 se establecen los supuestos por los que no es necesario el consentimiento: " a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él". LO 41/2002

³⁵ En la redacción original del precepto, el apartado cuarto del artículo 13 decía que "*En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo*"

de la menor, las consecuencias negativas para la salud de la mujer, probando que la menor tenga que tutelar de otras normas el derecho a la privacidad y autonomía, entre otros³⁶.

Conforme a estos motivos y con la llegada del Partido Popular al gobierno se modificó este precepto a través de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo³⁷.

Pero como ya decíamos, este no iba a ser la única crítica que recibiría dicha ley, así el 30 de abril de 2010 se admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra determinados preceptos de la Ley. Como ya hablaremos después, este recurso no ha sido contestado en la actualidad.

Pero, el 20 de diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de la Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. En él se pretendía despenalizar el IVE únicamente en dos supuestos: agresión sexual y grave riesgo para la salud o vida de la embarazada al entender que *“La existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o la presión insostenible que para la mujer puede suponer la gestación que es consecuencia de una agresión sexual, representan supuestos de colisión entre la vida del nasciturus y derechos relativos a valores constitucionales de extraordinaria significación -la vida, la salud y la dignidad más esencial de la mujer- que justifican, bajo determinadas condiciones, la admisión de la prevalencia de éstos sobre aquél”*³⁸. Es decir, se pretendía volver a lo previsto en 1985 suprimiendo incluso uno de los motivos de despenalización que se incluyeron por aquel entonces.

Esta ley, a manos del Partido Popular, y que fue conocida como la Reforma de Gallardón, en su disposición derogatoria entendía por derogada la Ley Orgánica 2/2010, sin más explicación que la protección del nasciturus.

³⁶ FUGALI MILIONE, CIRO “Algunas reflexiones en torno a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. *Documentos de trabajo (Centro de Estudios Andaluces)*, Serie 3, Nº. 1, 2011, pág. 36

³⁷ SALINERO ALONSO, CARMEN “El aborto no punible en el ordenamiento jurídico español: la -casi eterna- respuesta a una incertidumbre”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 20-31. Págs. 30-32

³⁸ Exposición de motivos Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada de 20 de diciembre de 2013.

Los argumentos que dieron paso a este Anteproyecto, según la línea estudiada por LORENO son:

- 1º Una demanda social que buscaba la penalización del aborto. Sin embargo, los datos mostraban que alrededor de un 70% no consideraba necesario este cambio.
- 2º Fracaso de la ley actual para reducir el número de abortos. En este motivo, siguiendo también los datos sociales, en 2012 hubo una reducción de un 5% en relación con 2011.
- 3º Corregir un déficit de protección legal del concebido. Bien es cierto que con la LO 2/2010, se dan las garantías necesarias al concebido protegiendo sin desvirtuar los derechos de la mujer embarazada.
- 4º Supuesto incumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al incluir el supuesto de aborto cuando existieran graves anomalías fetales. La autora considera este argumento inexacto al no decir nada la Convención en relación a este supuesto, y desproporcionado al ser uno de los casos menos practicado³⁹.

Finalmente, este intento de Ley, debido a la presión social promovida por manifestaciones, movimientos feministas y las elecciones europeas, se terminó retirando el Anteproyecto.

Posteriormente analizaremos los motivos del recurso también interpuesto por el Partido Popular, pero antes pasaremos a analizar la regulación del IVE en otros países.

4.- ABORTO EN EL DERECHO COMPARADO

Que el aborto es un tema muy discutido es algo que ya hemos visto, pero es algo que no ocurre en España, sino que en el resto de países tanto europeos como de otros continentes, ha sido una cuestión que ha creado mucha controversia y que ha acabado o bien prohibiéndolo, o permitiéndolo al igual que en nuestro país.

En este punto, en primer lugar, vamos a observar que ocurre en países europeos de nuestro entorno como es el caso de Alemania, y pasaremos a analizar lo ocurrido en América, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

³⁹ LAURENZO COPELLO, PATRICIA "Desandando el camino: La contrarreforma del aborto". *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2014, núm. 16-09. Págs. 09:4-09:14.

4.1.- Aborto en Europa

En Europa, la mayoría de los países tienen una regulación permisiva en cuanto a la interrupción del embarazo, siguiendo, al igual que en España, un sistema de plazos que oscila entre las 10, como es el caso de Portugal, y 24 semanas de embarazo, aunque muchos de ellos siguen una media de 12 semanas. En este último plazo se encuentran, entre otros, Bélgica, Dinamarca, Alemania, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Francia, Grecia, etc... Rumanía sigue el mismo sistema que el nuestro, al tener de plazo 14 semanas, y en cuanto a Reino Unido y Finlandia, siguen un sistema de supuestos como, por ejemplo, en el primero de ellos, el aborto está permitido hasta la semana 24 cuando suponga riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o problemas socioeconómicos, o sin límite si es el caso de malformaciones o grave riesgo para el feto⁴⁰.

Uno de los últimos países que se ha adentrado a regular esta situación es Irlanda, que ha permitido la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas del mismo sin que la mujer tenga que justificar el motivo, y hasta los 6 primeros meses cuando el feto no pueda vivir dentro del vientre de la madre o cuando exista un grave riesgo para la vida de la mujer⁴¹. Se trata de un país muy conflictivo en este tema, como veremos más adelante.

Pero no todos los países europeos mantienen una regulación permisiva. Malta, San Marino y Andorra, mantienen una regulación prohibitiva que supone penas de cárcel de hasta 3 años como en el caso del primero, si se produce un aborto voluntario. Estos países, junto con Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana, son los únicos de todos los continentes con una protección integral del no nacido⁴².

Bien es cierto, que estas regulaciones no siempre han estado exentas de controversias, como en el caso de Irlanda, que en el año 2010, cuando todavía mantenía una regulación prohibitiva del aborto, se interpone contra ella una demanda, por primera vez de esta materia, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dio lugar a la famosa Sentencia A, B y C vs Irlanda. En esta se cuestionaba la vulneración de la vida privada de tres mujeres, dos irlandesas y una lituana, que se dirigieron a Reino Unido donde abortaron al no poder hacerlo en Irlanda. No son supuestos iguales, ya que la C estaba

⁴⁰ " La ley del aborto en Europa: predominan los plazos y solo un país lo prohíbe expresamente". 20 minutos. 20 de diciembre de 2012

⁴¹ "El aborto ya es legal en Irlanda". *El País*. 14 de diciembre de 2018

⁴² "Solo El Vaticano, Malta y Andorra prohíben el aborto en Europa". *COPE*. 25 de mayo de 2018

enferma de cáncer, por lo que podría haber abortado en Irlanda según la excepción que mantenía en su ordenamiento jurídico relativo al peligro de la vida de la madre. Por lo que el Tribunal distinguió estos dos supuestos:

1. En relación a la mujer A y B, al tratarse de aborto por razón de salud o bienestar, el Tribunal asumió que no existía vulneración porque se trataba de un límite constitucional para la protección de los valores morales.
2. Sin embargo, en relación a la mujer C, al ser el aborto válido en Irlanda y no haber desarrollado la previsión constitucional que permite la interrupción del embarazo, y no poder optar por un procedimiento efectivo, sí que se vulneró el respeto a la vida privada⁴³.

Otra sentencia muy famosa es la llamada Sentencia R.R vs Polonia. En ella la demandante dio a luz a un bebé con el síndrome de Turner ya que cuando se hicieron las pruebas necesarias que demostraron que el feto padecía una anomalía, aun habiéndose podido realizar antes, el médico alegó que era demasiado tarde para interrumpir el embarazo al ya el feto poder sobrevivir fuera del vientre materno. En ese momento, la madre inició los trámites legales contra los médicos que le atendieron al no proteger sus intereses por no haber realizado los estudios prenatales necesarios que ocasionaron la imposibilidad de decidir si quería o no abortar⁴⁴.

Al igual que ocurrió con la anterior sentencia, la cuestión giró en torno a si la demandante podía interrumpir el embarazo o no. Esta sentencia tuvo como fallo la vulneración de los artículos 3⁴⁵ y 8⁴⁶ del Convenio Europeo para la protección de los derechos y libertades

⁴³ REY MARTÍNEZ, FERNANDO “¿Es el aborto un derecho en Europa? Comentario de la sentencia «A, B y C vs. Irlanda», del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. *Pensamiento Constitucional Año XVI N° 16*. Págs. 174-175

⁴⁴Caso R.R vs Polonia (N° 27617/04). Sentencia de 26 de mayo de 2011

⁴⁵ Artículo 3. “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Convenio Europeo para la protección de los derechos y libertades fundamentales, relativos a la prohibición del maltrato y el respeto a la vida privada y familiar.

⁴⁶ Artículo 8. “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”. Convenio Europeo para la protección de los derechos y libertades fundamentales, relativos a la prohibición del maltrato y el respeto a la vida privada y familiar.

fundamentales, relativo a la prohibición del maltrato y el respeto a la vida privada y familiar.

Con todo ello podemos observar que, aunque Europa sigue una tendencia hacia una regulación permisiva del aborto, lo cierto es que aún siguen países en los que existe prohibición total, y sentencias que poco a poco van cambiando el sistema del IVE.

4.2.- Aborto en Latinoamérica y el Caribe

A diferencia de lo que ocurre en España, los países de Latinoamérica y el Caribe tienen como norma general la prohibición del aborto o la legalización solo en determinados casos. Según los datos de CHIAPPARRONE, el 15% de los países tienen una penalización total de la interrupción del embarazo, el 73% permite el aborto en determinados casos y el 15% mantiene una despenalización total⁴⁷.

Esto es debido a, principalmente, la cultura machista promovida en la mayoría de estos países, es decir, la cultura patriarcal que mantienen junto con la religión católica⁴⁸

Entre los primeros nos encontramos, como ya decíamos antes, con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Honduras.

En referencia al primero, su ley es una de las más estrictas, estableciendo la interrupción del embarazo ilegal en todo tipo de supuestos con penas entre 2 y 8 años, pudiendo llegar a 30 años si se trata como un caso de homicidio. Así le ocurrió a Evelyn Hernández que, tras ser violada, dio a luz a un bebé muerto. Sin embargo, fue un caso excepcional en el país al ser de las pocas absueltas por estos hechos⁴⁹.

Al igual que en este país, Nicaragua tiene penas de hasta 2 años de prisión para la madre abortante y hasta 8 para el médico que realiza el aborto⁵⁰, en República Dominicana hasta 3 años⁵¹ y en Honduras de 3 a 10 años.

⁴⁷ CHIAPPARRONE, NORMA GRACIELA "El derecho al aborto en América Latina y el Caribe". *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas*, 3, 2018, págs. 202-203

⁴⁸ FERNÁNDEZ CEDIEL, MIRIAM CRISTINA; CORTÉS ROBERTO "Exploración de los Derechos Sexuales y Reproductivos: conceptos y Elementos Claves" *Revista Entornos*, Vol. 30, Nº 2, 2017, págs. 51-53.

⁴⁹ "Aborto en El Salvador: absuelven a Evelyn Hernández, la joven que dio a luz a un bebé muerto tras ser violada". *BBC News Mundo*. 20 de agosto de 2019

⁵⁰ "Aborto en Nicaragua: 12 años de lucha por el derecho a decidir". *El Confidencial*. 26 de noviembre de 2018.

⁵¹ Artículo 317 CP República Dominicana: "El que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión menor. La misma pena se impondrá a la mujer que causare un aborto o que consintiere en hacer uso de

Además, este último país rechazó reformar el Código Penal para los supuestos de aborto eugenésico, terapéutico o ético⁵².

Si tenemos en cuenta los países que permite el aborto en determinados casos, nos encontramos con dos grupos diferenciados, los que permiten el aborto en los casos en los que corre peligro la vida o la salud de la embarazada, y los que además de este caso, permiten la interrupción del embarazo cuando haya existido violación.

Dentro del primer grupo, nos encontramos con Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Belice.

Por otro lado, dentro del segundo grupo, nos encontramos con Argentina, que como ya hemos dicho, permite el aborto cuando el embarazo se haya producido por una violación. En la actualidad, ha habido un gran debate con respecto a este tema, llegando a provocar incluso la dimisión del Secretario de Salud del país, al activar un protocolo que modificaba el procedimiento a seguir en el caso de las mujeres gestantes que quieren abortar, y el cual fue derogado dos días después⁵³.

Junto con estos países, nos encontramos con Ecuador, que permite el aborto en casos en los que la mujer esté en una situación de demencia. Este año se ha pretendido llevar a cabo una reforma legislativa con la intención de legalizar el aborto en casos de violación, sin embargo, ha sido rechazada por el Parlamento del país⁵⁴.

El último en unirse a la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido Chile, el cual en 2017, despenalizó el aborto en tres ocasiones: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y en embarazos producidos por una agresión sexual⁵⁵.

Finalmente, los países con una despenalización total del embarazo son Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico.

las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren o en someterse a los medios abortivos, siempre que el aborto se haya efectuado. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años a las personas que hayan puesto en relación o comunicación una mujer embarazada con otra persona para que le produzca el aborto, siempre que el aborto se haya efectuado, aun cuando no hayan cooperado directamente al aborto. Los médicos, cirujanos, parteras, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales médicos, que, abusando de su profesión, causaren el aborto o cooperaren a él, incurrirán en la pena de cinco a veinte años de reclusión mayor, si el aborto se efectuare”.

⁵² “Aborto en Honduras: qué es La Línea, el servicio clandestino de información telefónica sobre interrupción del embarazo que desafía al gobierno”. *BBC News Mundo*. 14 de agosto de 2019

⁵³ “El macrismo más conservador gana la pelea interna sobre el aborto”. *El País*. 22 de noviembre de 2019.

⁵⁴ “Aborto en Ecuador: el Parlamento rechaza la reforma legislativa para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación”. *BBC News Mundo*. 18 de septiembre de 2019

⁵⁵ “Chile aprueba la despenalización del aborto en tres causales en histórica decisión”. *BBC Mundo*. 21 de agosto de 2017.

Esto ha provocado que más de 5000 mujeres mueran cada año a consecuencia de abortos clandestinos, lo que supone un 21% de las muertes maternas en el mundo⁵⁶.

A todo esto, podemos concluir que dependiendo del lugar en el que nos encontramos, como consecuencia de la cultura y las tradiciones típicas de cada país, veremos legislaciones totalmente opuestas.

5.- EXAMEN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 4523-2010, EN RELACIÓN CON DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Una vez hecho un pequeño desarrollo de la legislación europea y latinoamericana, volvemos al tema que nos atañe, y nos centramos esta vez en el famoso recurso interpuesto por el Partido Popular en 2010 contra la ley orgánica 2/2010 relativa a la interrupción voluntaria del embarazo.

Se trata de un recurso interpuesto por Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde comisionado por otros 70 diputados del PP contra los artículos 5.1 e), 8 in limine y letras a) y b), 12, 13.4, 14, 15 a), b) y c), 17.2 y 5, 19.2 párrafo primero (aunque, realmente, la impugnación se refiere al párrafo segundo), y contra la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, relativo al sistema de plazos, requisitos y consentimiento informado, instando a que se declaren nulo e inconstitucionales los preceptos impugnados, así como la suspensión y vigencia de los mismos, además de una tramitación preferente y sumaria del recurso.

Consideran estos preceptos contrarios a la Constitución Española, en concreto al artículo 15 del texto legal, relativo, como ya se ha mencionado, al derecho a la vida que tenemos todos, incluido el nasciturus, al igual que los preceptos 9.3, 10.1, 14, 16, 18, 20, 27, 43 y 49.

Basaban su propuesta de la suspensión de la vigencia de los artículos en el artículo 30⁵⁷ de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC), ya que, aunque el precepto

⁵⁶ LAMAS MARTA "Género, desarrollo y feminismo en América Latina". *Pensamiento iberoamericano*, N.º 0, 2007, págs. 133- 152

⁵⁷ Art 30 LOTC. "La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo ciento sesenta y uno, dos, de la

declara la no suspensión de una ley aun en el caso de la admisión de un recurso, no se está pidiendo la suspensión de la misma, sino de algunos de sus preceptos. Además, alegaban la concurrencia del “periculum in mora” al haber un grave perjuicio que podría ser irreparable, a la vez que existía “fumus boni iuri” al carecer de presunción de legitimidad material.

El abogado del Estado contradice estas manifestaciones argumentando la inexistencia de una previsión constitucional que permita que el Tribunal Constitucional suspender la vigencia de los preceptos de una ley aprobada por las Cortes Generales, según lo previsto en el ya mencionado artículo 30 LOTC y diversa doctrina constitucional como el auto 141/1981 o ATC 462/1985. Igualmente, en lo referido a la suspensión de solo unos preceptos y no de la ley en su totalidad, alude a doctrina constitucional en la que se deniegan situaciones similares como pueden ser los AATC 141/1989 o 58/2006.

En segundo lugar, también rechaza la autocuestión de inconstitucional al solo poderse realizar por recurso de amparo, y finalmente, en relación al derecho de medida cautelar y al principio de “fumus boni iuri”, afirma que el recurso de inconstitucionalidad es un procedimiento de control abstracto de constitucionalidad de una ley por lo que los diputados no tienen competencia para pedir tal medida cautelar, y añade que, no existe fumus mali iuris.

El día 14 de julio, mediante Auto 90/2010, se acuerda denegar la suspensión solicitada⁵⁸. Esta denegación es basada, en primer lugar, en lo descrito en el artículo 1.1 LOTC, por el cual el TC solo va a estar sometido a la Constitución y dicha Ley Orgánica, y ninguna de ella prevé la posibilidad de que la ley estatal pueda ver impedida su aplicabilidad⁵⁹. Por lo que, no va a haber limitación alguna, a excepción que esté expresamente prevista

Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas”

⁵⁸ Cabe mencionar que no todos los magistrados estuvieron de acuerdo, y se formularon cuatro votos particulares

⁵⁹ Así el FJ 2 del ATC 90/2010 establece que “[...] Por consiguiente, resulta patente que, según las determinaciones de la Constitución y la LOTC, no cabe acordar ninguna limitación a la aplicabilidad de la Ley estatal como consecuencia de que haya sido impugnada ante el Tribunal Constitucional. Y en este sentido se ha manifestado este Tribunal en una reiterada y firme doctrina. Ya en la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3, nos referimos a la presunción de legitimidad de la que disfrutaban los actos o normas que emanan de poderes legítimos, que obliga a considerar como excepcional la posibilidad de suspender su vigencia o ejecutoriedad; presunción que es tanto más enérgica, añadíamos, cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular, y que llega a su grado máximo en el caso de legislador. Por tanto, mientras no se haya destruido esa presunción a través de la constatación de que la Ley ha infringido la Constitución, esto es, mediante la declaración de su inconstitucionalidad, «toda suspensión de la

En segundo lugar, en lo relativo a la interpretación realizada por los recurrentes del artículo 30 LOTC, argumentan, de forma literal que *“no es posible distinguir con base en su propio tenor entre la ley en su conjunto y los concretos preceptos de la misma que hayan sido impugnados para delimitar el objeto de la regla del reiterado art. 30 LOTC”*.

En relación a la autocuestión de inconstitucional, no se difiere de lo argumentado por el Abogado del Estado⁶⁰.

Hay que decir, que los recurrentes, como ya se dijo, propusieron la tramitación preferente y sumaria del recurso, hecho que apoyó el Abogado del Estado y que el Tribunal Constitucional concedió. Sin embargo, y como se puede observar al ser el objeto del trabajo en cuestión, nueve años después sigue sin resolución.

5.1.- Motivos del recurso

Una vez explicado este tema, vamos a dar cuenta de los motivos por los que los recurrentes interpusieron este recurso. Dichos motivos son divididos en dos; los seis primeros se centran en la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley Orgánica 2/2010 en cuanto a la vulneración del artículo 15 de nuestra Carta Magna y de la interpretación hecha por el TC en la Sentencia 53/1985 ya analizada. Los motivos séptimo y octavo son

eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser considerada excepcional, lo que naturalmente impide ver en ella una consecuencia necesaria general o generalizable de la primacía de la Constitución» [...]”.

⁶⁰ El FJ 3 de ATC 90/2010 expresa que “[...] La otra línea argumental de la demanda, que postal el planteamiento de la autocuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 30 LOTC, con objeto de obtener la suspensión de su aplicación al presente procedimiento, salvando así el obstáculo legal que impide atender la medida de suspensión postulado por los Diputados recurrentes, resulta inadmisibles, porque se fundamenta en una visión errónea de los presupuestos y consecuencia del planteamiento de la autocuestión de inconstitucionalidad. En efecto, como advierte el Abogado del Estado, tal mecanismo sólo resulta procedente en el caso de los recursos de amparo, de acuerdo con lo previsto en el art. 55.2. LOTC, según se deduce de la propia doctrina de este Tribunal, que ha condicionado el planteamiento de la autocuestión a la previa existencia de un recurso de amparo (SSTC 40/1989, de 16 de febrero, FJ 2; y 38/2002, de 3 de marzo, FJ 6), hasta el extremo de que, en la autocuestión, se ha de ceñir al examen en el perímetro del debate trabajo en el recurso de amparo previo (STC 149/200, de 1 de junio, FJ 2). En todo caso, frente a lo que se afirma en la demanda, el efecto que produce su planteamiento no es el de suspender la vigencia de la ley a la que se refiera la cuestión, sino la suspensión del procedimiento judicial en el que se haya suscitado, como se deriva de los arts. 163 CE y 35.3 LOTC. Es decir, que aún en el supuesto de que se planteará una autocuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 30 LOTC, a raíz de la petición de suspensión formulada por los recurrentes, el precepto continuaría vigente mientras se sustanciara la cuestión, siendo el procedimiento en el que se hubiese suscitado – esto es, el promovido por los recurrentes – el que quedaría en suspenso”.

basados en las cuestiones de ideología que se pretenden asentar en la educación sexual y reproductiva⁶¹.

- Motivo primero

El primero de los motivos está basado en la vulneración del artículo 15 de la Constitución, en relación con el artículo 10.1 y 2, así como el 9.3, por la inconstitucionalidad de los preceptos 14 y 17.2 y 5 de la LO 2/2010.

Sin perjuicio de las alusiones que hemos hecho a los preceptos en cuestión, recordemos que el artículo 14 de la Ley Orgánica trata sobre la interrupción del embarazo a petición de la mujer siempre que se encuentre dentro de las primeras catorce semanas de embarazo y se haya informado a la mujer de todos sus derechos, prestaciones y ayudas.

Por otro lado, los apartados 2 y 5 del artículo 17, se basa en la información que se debe facilitar a la mujer embarazada.

En relación a la inconstitucionalidad del artículo 14, los recurrentes afirman que mediante esta Ley Orgánica y la introducción del sistema de plazos, lo que se pretende es acabar con la vida humana y la protección al no nacido, al no existir ninguna causa objetiva que proteja estos hechos, dejándolo a merced de la voluntad de la madre mediante un requisito temporal (catorce semanas) y uno formal (información de todos los derechos, prestaciones y ayudas con un plazo de tres días).

Alegan que, como ya se había previsto en la STC 53/1985, y apoyada por las SSTC 212/1997 y 116/1999, la protección que concede el artículo 15 a la vida se extiende también a los nasciturus, por lo que no establecer una causa objetiva que permita la interrupción del embarazo, provoca que el derecho a la vida quede en un escalón inferior a los derechos de libertad e intimidad de la mujer embarazada que se superponen al ser los únicos válidos en la decisión del aborto. Asimismo, añaden el incumplimiento de la ley con el FJ 12 de la ley 53/1985 al no garantizar la ponderación de bienes y derechos entre la mujer y el nasciturus.

⁶¹ Así, los propios recurrentes indican que *“En el presente recurso se reacciona contra ese intento de adoctrinamiento impuesto desde el Estado, y se propugnará la inconstitucionalidad de aquellos preceptos que no se compadecen con los principios, valores y derechos constitucionales que protegen la libertad ideológica y de enseñanza de los ciudadanos y de la sociedad civil”*.

Fundamentan además, que el Dictamen del Consejo de Estado de 17 de septiembre de 2009, en el cual se establece que la mediación de un tercero en la intervención de la mujer gestante, no ofrece una garantía para el feto y limita el derecho de la mujer⁶², está eliminando la única garantía con la que cuenta el nasciturus, al no ser ya solo la madre la que decida por la continuidad del embarazo.

En cuanto a la inconstitucionalidad de este precepto, se hace referencia a la vulneración del apartado tercero del artículo 9 de la Constitución, el cual dice que “*La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos*”. Refieren a la inseguridad jurídica que se crea tanto para la madre como para el médico al no justificar el sistema de plazos ni concretar el ámbito de lo punible.

Asimismo, y para terminar el primero de los motivos, en cuanto a la inconstitucionalidad del Art 17.2 y 5, se vuelve a hacer referencia al Dictamen del Consejo de Estado antes mencionado, y consideran que las garantías administrativas no son suficientes y que la eliminación de la responsabilidad penal en la interrupción voluntaria del embarazo vulnera el derecho a la vida (artículo 15 CE).

- Motivo segundo

El segundo motivo se basa en la inconstitucionalidad del artículo 15.a) de la LO 2/2010 relativo a la interrupción del embarazo cuando suponga un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, siempre que se encuentre dentro de las 22 semanas de gestación y se haya emitido un dictamen por un médico especialista. Consideran que vulnera, de nuevo, el artículo 15 de la Constitución.

Se fundamentan en la supresión con respecto a la anterior, del concepto “salud psíquica o física”, al considerar que se extiende del supuesto a despenalizar determinado en el

⁶² Según el Dictamen del Consejo de Estado de 2009 “Desde esta más que lógica perspectiva, la intervención determinante de un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante -esto es lo que la propia Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, denominó su “autodeterminación consciente”, sea dicho tercero, pareja, médico, funcionario o juez- no ofrece una mayor garantía para el feto y a la vez limita innecesariamente la personalidad de la mujer, valor amparado en el artículo 10.1 de la Constitución y expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional en las citadas sentencias”.

artículo 2 a) de la LO 2/2010⁶³. Según los recurrentes “ *supone una extensión absolutamente injustificada del aborto terapéutico que puede llevar en muchos casos a desvalorizar de forma inadmisibile la vida humana del nasciturus frente a un valor de mucha menor entidad, como es el “bienestar social”, vulnerando la doctrina sentada por el TC sobre la aplicación del art. 15 CE a la vida humana en formación.*”⁶⁴

Además establecen que, con este cambio, se produce una inclusión de la vida social a este concepto, sin ningún tipo de ponderación y control, lo que provoca una mayor desprotección del nasciturus.

- Motivo tercero

Se alega la inconstitucionalidad de los apartados a) y b) del artículo 15 de la LO 2/2010 por vulnerarse los preceptos constitucionales 9.3, 10, 14, 15, 43 y 49 en relación con el artículo 10.1 y 2 de nuestra Constitución.

Como ya vimos, el apartado a) del artículo 15 expresa la interrupción del embarazo cuando exista un grave riesgo para la vida de la embarazada. Pues bien, el apartado b) amplía los supuestos de interrupción del embarazo incluyendo en ellos la posibilidad de abortar cuando haya un riesgo de graves anomalías en el feto, siempre que no se superen las 22 semanas de embarazo, y se haya emitido un dictamen médico.

Según los demandantes se produce una vulneración del artículo 9.3, anteriormente ya explicado, al entender que existe una imprecisión en los términos utilizados no dejando claro a que se refieren con “graves anomalías”, lo que produce una inseguridad jurídica y además una posibilidad mayor de fraude de ley al poder ajustar cada situación al supuesto más beneficioso para la mujer embarazada.

Por otro lado, también establecen una infracción de los artículos 14 y 15 CE, relativos a la igualdad ante la ley sin ningún tipo de discriminación y al derecho a la vida. Entienden y relacionan este supuesto con las teorías eugenésicas del nazismo al implantar distintos valores a la vida humana, al suponer que el niño que va a nacer con una discapacidad no tiene el mismo valor que uno que no lo haga y provocando con ello una discriminación prohibida en nuestro artículo 14.

⁶³ Según el artículo 2 a) de la LO 2/2010, se considera “Salud: el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

⁶⁴ Recurso de inconstitucionalidad n.º 4523-2010, en relación con diversos preceptos de la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

No terminando aquí, la parte recurrente entiende además, que se vulnera el artículo 43⁶⁵ de nuestra Carta Magna, pues en él se reconoce la protección al derecho a la salud, e incluyendo este supuesto, se renuncia a esto mismo al permitir que se aborte en el caso en el que exista el riesgo de una discapacidad. Por los mismos motivos, se vulnerará así el artículo 49 según el cual *“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”*.

En cuanto a este motivo, terminar diciendo que consideran que este supuesto da a la vida humana en determinados supuestos una segunda categoría lo que provoca la reducción de las garantías constitucionales que permiten la protección de este derecho fundamental.

- Motivo cuarto

Enlazando con la vulneración del artículo 15 CE, se encuentra el cuarto motivo del recurso, el cual entiende que se ha violado este precepto debido a la inconstitucionalidad del art 12 de la LO 2/2010, en el cual se implanta la garantía de acceso a la interrupción del embarazo regulando que *“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”*.

Consideran que esta interpretación normativa da más valor y relevancia a los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que se puede considerar una prevalencia incondicional, sin ponderar adecuadamente un conflicto entre derechos que le corresponde, en un primer lugar, al legislador, y posteriormente al intérprete constitucional.

- Motivo quinto

⁶⁵ Artículo 43 CE “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

Fijándonos ya en el quinto motivo, se recurre a la inconstitucionalidad del artículo 13.4 de la LO 2/2010 y disposición final segunda, por la vulneración de los artículos 15, 27.2 y 39.1 y 4 de la Constitución.

Antes de comenzar exponiendo este motivo, hay que decir que actualmente este precepto ya está suprimido, como se puede ver en explicaciones anteriores, pero de ello ya nos encargaremos en el siguiente punto.

El artículo 13.4 establece la posibilidad de abortar a menores de 16 y 17 años sin más consentimiento que el suyo propio. Esto hace que se vulneren los diversos Tratados internacionales al no proteger la seguridad y bienestar del menor, además de la vulneración del derecho de los padres explícito en el artículo 27.3 CE⁶⁶

Por otro lado, expresan que este precepto está basado en un criterio objetivo (la edad de la menor) y no en un criterio subjetivo como podría ser la capacidad de la misma lo que hace que se desconozca si la decisión de la mujer menor está siendo libre y racional o si tiene la suficiente capacidad para hacerlo.

Todo ello conduce, como es lógico a la vulneración del artículo 39.1 CE por el cual “*Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia*”, y también del famoso artículo 15 CE, al seguir eliminando la protección del no nacido pudiendo consentir el aborto alguien que no tiene capacidad jurídica suficiente para hacerlo⁶⁷.

- Motivo sexto

⁶⁶ Artículo 27.3 CE “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

⁶⁷ Es importante apuntar las palabras dichas en el recurso “*llama poderosamente la atención el hecho de que la Ley de plazos, para fijar el límite a partir del cual no se necesita el consentimiento de padres o tutores para decidir sobre la interrupción del embarazo, haya establecido un criterio objetivo (el de la edad: ser mayor de 16 años) y no uno subjetivo (el de la madurez psicológica), habida cuenta de que éste último es el único que podría encontrar una cierta justificación desde la perspectiva del respeto a la libertad de la menor, que parece ser el motivo que explica el cambio legal operado por la nueva norma*”. En relación al artículo 15 CE supone una vulneración “*al preverse que la decisión sobre la terminación del embarazo sea adoptada por quien carece de capacidad de juicio suficiente para tomar una decisión de tanta trascendencia para la vida del nasciturus*”, donde la no intervención de los representantes legales de la menor disminuye las garantías tanto para la propia menor embarazada, que puede verse implicada en la comisión de un delito, como para los depositarios de la patria potestad; para los padres a quienes se priva del derecho a transmitir su opinión a su hija embarazada y contribuir así a formar sus convicciones; y para la vida humana del nasciturus que en este caso puede ser sacrificada sobre la base de un consentimiento incompleto y no por lo tanto no plenamente libre y maduro, dado que legalmente se ha excluido la contribución que para la formación del mismo supone la intervención de los padres de la menor embarazada”.

Ultimando ya con la primera parte primera del recurso, nos podemos a desarrollar el sexto motivo. En él, se alega la inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 19.2 de la LO 2/2010 por la vulneración de los artículos 16.1 y 2 y 18.1 CE.

El precepto aquí recurrido es el relativo a la objeción de conciencia para el caso de la interrupción del embarazo. Para poderse llevar a cabo se tienen que seguir unas determinadas pautas:

1. Serán los profesionales sanitarios directamente implicados en IVE los que tengan derecho a ejercer la objeción de conciencia, sin que esto suponga un menoscabo en el acceso y la calidad asistencial de la prestación
2. Será una decisión individual del personal directamente implicado, y deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.
3. Sin perjuicio de lo anterior, los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica a las mujeres que lo necesiten, antes y después del aborto.

A todo ello, los recurrentes contestan alegando, en primer lugar, que se trata de unas restricciones injustificadas y desproporcionadas lo que afectan directamente al contenido esencial del derecho fundamental mismo, al imponer límites contrarios a la Constitución.

Por otro lado, que, el concepto “personal sanitario directamente implicado”, crea una inseguridad jurídica al no establecer con claridad quién entra y quién no dentro de esos supuestos, y por tanto, quien puede atenerse al derecho de objeción de conciencia.

También alegan la vulneración del artículo 16.1 CE, que trae a colación la libertad ideológica, religiosa y de culto sin ningún tipo de límite más que el que establezca la ley, al indicarse en el precepto recurrido la condición de objetar conciencia siempre y cuando no se disminuya el acceso y la calidad de la prestación. Esto supone un conflicto de derechos, por el cual habría que ponderar los límites de los mismos y llegar a una solución razonable, sin embargo, los recurrentes afirman que prevalece la interrupción del embarazo ante el derecho fundamental, situación que no debería darse.

Finalmente, se hace mención a la vulneración del artículo 18.1 que garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen. Consideran que tener que dar una manifestación anticipada y por escrito de los hechos por los que se solicita objeción de conciencia supone una vulneración a la intimidad del profesional sanitario.

- Motivo Séptimo

Para dar por finalizado este punto, vamos a hacer referencia a los dos últimos motivos del recurso, que ya no trataban cuestiones de inconstitucionalidad sino cuestiones de ideología.

En cuanto al séptimo motivo, se expresa la inconstitucionalidad del artículo 5.1 e) LO 2/2010 por la vulneración de los artículos 9.3, 16.1 y 20.1 c) CE.

El precepto recurrido establece que los poderes públicos van a garantizar, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva.

En primer lugar, los demandantes hablan de la inseguridad jurídica que crea el precepto al no establecerse de manera concreta el concepto “perspectiva de género” por lo que no se puede saber de modo exacto el tipo de educación a enseñar.

Asimismo, que la educación sanitaria se tenga que dar desde una perspectiva de género impone una ideología determinada que provoca tanto la vulneración del artículo 20.1 c) CE relativo a la libertad de cátedra como el artículo 16.1, que, como decíamos se centraba en la libertad ideológica, y también, se vulnera el artículo 27.3 que implica la decisión de los padres sobre la formación religiosa y moral de sus hijos.

Hacen un pequeño inciso en lo que se refiere a la libertad ideológica, pues no supondría una vulneración en el caso de poder ejercer el derecho de objeción de conciencia, sin embargo, como ya veíamos, se encuentra limitados para aquellos que son directamente parte del proceso.

Por todo ello, consideran inconstitucional este artículo, amén de la vulneración de derechos fundamentales tales como la libertad ideológica.

- Motivo octavo

El último de los motivos se encuentra íntimamente ligado con el anterior, y supone la vulneración de los artículos 16.1, 20.1 c) y 27.10 CE por la inconstitucionalidad del artículo 8 *in limine* y letras a) y b) LO 2/2010.

El artículo 8 expresa que la formación de los profesionales de la salud se va a abordar, de la misma forma que ya se hacía con la educación, con una perspectiva de género y va a incluir:

- a) La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo.
- b) La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva, incluida la práctica de la interrupción del embarazo.

Al igual que ocurría en los supuestos anteriores, se produce una inseguridad jurídica al no concretar el término “perspectiva de género” y se produce además, una vulneración de los artículos 16.1 y 20.1 c) CE, por los mismos motivos que se indicaban en el supuesto anterior cuando se hablaba de la educación.

Ahora bien, aquí se incluye la vulneración del artículo 27.10 CE relativo a la autonomía de las Universidades puesto que se está imponiendo la enseñanza a los profesionales de la interrupción voluntaria del embarazo sin respetar los Estatutos de las propias universidades ni sus planes de estudio.

Por tanto, imponer criterios de enseñanza tanto en escuelas como en universidades va en contra de los valores propugnados por la Constitución.

6.- ¿FUTURA REGULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO? A modo de conclusiones, posible resolución del Tribunal Constitucional al Recuso

Después de haber analizado exhaustivamente cada uno de los motivos por los cuales se interpuso el recurso, vamos a proceder a exponer los motivos por los cuales debería desestimarse el recurso de manera esquematizada y justificada.

En relación al primer motivo, basado en la vulneración del artículo 15 de la Constitución, en relación con el artículo 10.1 y 2, así como el 9.3, por la inconstitucionalidad de los preceptos 14 y 17.2 y 5 de la LO 2/2010.

Creo que para comenzar a responder los motivos, hay que tener claro el concepto de dignidad humana y desarrollo de la personalidad. Aunque se va desarrollando a lo largo de toda la STC 53/1985, su fundamento jurídico tercero decía al respecto que *“nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) [...] Del sentido de estos preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. La dignidad está reconocida a todas las personas con carácter general, pero cuando el intérprete constitucional trata de concretar este principio no puede ignorar el hecho obvio de la especificidad de la condición femenina y la concreción de los mencionados derechos en el ámbito de la maternidad, derechos que el Estado debe respetar y a cuya efectividad debe contribuir, dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos y bienes asimismo reconocidos por la Constitución”*. Es decir, que el derecho fundamental de la dignidad humana, que incluye los derechos de maternidad, se encuentra en un nivel superior el cual tiene que ser protegido y respetado. La dignidad humana hace que existan otros derechos, se encuentra en un nivel superior que goza de protección⁶⁸. Ya lo decía la Ministra de Igualdad en el debate parlamentario, uno de los propósitos de la ley era evitar la vulneración de la dignidad de la mujer y el desarrollo de su personalidad, y así se dispuso, como ya vimos, en el propio preámbulo de la ley al destacar la íntima conexión del desarrollo de la sexualidad con la dignidad de la persona.

CAMPOY explicaba a este respecto que el desarrollo de la personalidad tiene que ser respetado, reconocido y protegido en torno a lo que la persona considere lo más adecuado según su idea de dignidad humana, es decir, respetando y protegiendo a la persona para que pueda llevar a cabo sus propios planes de vida⁶⁹. Entonces, no se estaría respetando el derecho de a dignidad de la mujer y el libre desarrollo de la personalidad de la misma, si se le condiciona a la hora de elegir su decisión sobre el embarazo. Este concepto es enlazable con el respeto por la vida privada de las mujeres, que como se desarrollará más

⁶⁸ A este respecto, la Sentencia Lüth explica que “[...] La Ley Fundamental, que no quiere ser neutral frente a los valores, en su título referente a los derechos fundamentales también ha instituido un orden objetivo de valores y ha expresado un fortalecimiento principal de los derechos fundamentales.” Sentencia del Tribunal Constitucional alemán BVerfGE 7, 198.

⁶⁹ CREVILLÉN VERDET, PABLO “Los derechos reproductivos en la legislación española” Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2014. Págs. 564-565

tarde, se prevé en el artículo 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

En cuanto al motivo dado por los recurrentes, concerniente al sistema de plazos, como ya vimos, se alegaba la inexistencia de causa objetiva en este sistema, lo que suponía una no delimitación del ámbito de lo punible.

Pues bien, la resolución 1607/2008 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró que establecer unos plazos de aborto suponía reducir el número de abortos clandestinos que provocan un aumento de la mortalidad maternal así como lo que se conoce como “turismo de aborto”, que aumenta el tiempo de gestación y provoca que solo determinadas clases sociales puedan acceder⁷⁰.

Por lo que, aunque el sistema de plazos en sentido estricto no suponga como tal una causa objetiva, de manera indirecta si lo es, al justificarse en la protección de la mujer y la reducción de abortos no legales.

Si seguimos con las alegaciones del primer motivo, se cuestiona además la ponderación de derechos, creyendo que el derecho a la vida está a un nivel inferior que los derechos de la mujer.

A este respecto, ya la STC 53/1985 respondía diciendo que al tratarse de graves conflicto, no se pueden plantear únicamente desde el punto de vista de uno de los dos derechos, al suponer sino la extinción de uno de ellos, por lo que la única vía disponible es una ponderación de los mismos por parte del interprete constitucional, de manera que los armonice y los limite, siendo justificable una prevalencia de uno sobre otro⁷¹. En lo referido, por otro lado, a la garantía que prevé el FJ 12 de dicha sentencia, si bien es cierto

⁷⁰ Así, establecía que “el aborto no debe estar prohibido dentro de unos plazos de gestación razonables. Prohibir el aborto no consigue reducir el número de abortos: conduce sobre todo a abortos clandestinos, más traumáticos, y contribuye al aumento de la mortalidad maternal y/o al desarrollo del “turismo del aborto”, una actividad costosa, que prorroga el momento del aborto y genera desigualdades sociales. La legalidad del aborto no tiene efecto sobre la necesidad de la mujer de recurrir al aborto, sino solamente sobre su acceso a un aborto sin riesgo”. Resolución 1607/2008 de 16 de abril.

⁷¹ EL FJ 9 de la STC 53/1985 expresaba “Se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. Ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional. Por ello, en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos.

que aunque no se establecen los mismos límites al encontrarnos en otro régimen de despenalización del aborto, si existen limitaciones a la hora de hacerlo con la intención de proteger al “nasciturus”.

Y con esto se enlaza el punto final del primer motivo, y es la eliminación de la responsabilidad penal para la vulneración del artículo 15 CE. Como se ha mencionado en el anterior párrafo, no se pueden constituir las mismas garantías que con la anterior ley, ya que existen menos supuestos punibles. Ahora bien, esto no implica que dentro de la despenalización del aborto, no existan límites al ejercicio de la misma, pues al existir un sistema de plazos así como unas condiciones tales como la información previa, o el dictamen de un médico especialista, existen penas en el caso de incumplirlas. Éstas se encuentran previstas en los artículos 144 y siguientes del Código Penal, y pueden alcanzar los 10 años de pena de prisión⁷².

Los motivos segundo y tercero formulados se basan en la vulneración del artículo 15 de nuestra Carta Magna por la inconstitucionalidad del artículo 15 de la LO 2/2010, así como la vulneración de los artículos 10.1, 14, 43 y 49 de la Ley Fundamental.

En primer lugar, si nos centramos más en el segundo motivo, se basa en la inconstitucionalidad del artículo 15.a) de la LO 2/2010, este es el aborto cuando suponga un riesgo grave para la salud de la embarazada. Los recurrentes afirman que este precepto supone una extensión del término salud, extensión totalmente injustificada y que provoca gran inseguridad jurídica. Asimismo, el tercer motivo alega también la inconstitucionalidad del apartado b) de dicho artículo que implica la posibilidad de abortar cuando existan graves anomalías en el feto.

Lo primero que hay que tener en cuenta para poder dar respuesta a la extensión del término salud es la distinción existente entre el derecho a la vida y el derecho a la salud. Aunque todos estamos de acuerdo en que el derecho a la salud previsto en el artículo 43.1 CE está íntimamente relacionado con lo dispuesto en el artículo 15 CE, no podemos olvidarnos que mientras que el artículo 43.1 CE es un principio rector, el artículo 15 CE es un derecho fundamental protegido por todas las garantías constitucionales.

⁷² Se encuentran reflejados en el Título II del Libro II relativo a los delitos y sus penas, por lo que vulnerar los límites previstos en la LO 2/2010, supone un delito tipificado.

A este respecto, y a modo de concreción de lo que cabe dentro del término salud, son múltiples las sentencias que desarrollan ese concepto, entre las que se encuentran el ATC 57/2007 así como las SSTC 5/2002, 62/2007, 160/2007, entre otras.

El Fundamento jurídico 2º de la STC 5/2002 establece que *“el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal, queda comprendido en el derecho a la integridad personal del [artículo 15 CE](#), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma”*.⁷³

A tenor de la misma, la Sentencia 62/2007, relativa a un recurso de amparo interpuesto por una trabajadora a la que habían cambiado de puesto, el cual resultaba perjudicial para su salud o la de su feto, en relación con el FJ 3º de la STC 35/1996 se dice que *“Si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho fundamental, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma”*.⁷⁴

Por todo ello, en contradicción de lo que es expresado por la parte recurrente, no hay una extensión del término salud de forma injustificada, lo que provocaría la desvirtualización del artículo 15 CE, sino que se considera la posibilidad de abortar en los casos en los que exista un grave riesgo para la salud de la embarazada, límite que entra dentro de dicho precepto.

Además, tanto si es un riesgo físico como moral, se tendrá en cuenta si es un riesgo real y eficaz y si existe un nexo de causalidad entre el embarazo y el estado de salud.

No dada por terminada la explicación y a colación de lo recurrido también en el tercer y cuarto motivo (que volvía a insistir en la prevalencia de los derechos de la mujer embarazada), ya lo expresábamos antes con lo previsto por la STC 53/1985 en su fundamento jurídico noveno.

En cuanto al reiterado argumento de la vulneración del artículo 10.1, la STC 53/1985 protegía la dignidad de la mujer a este respecto, explicando que *“La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante*

⁷³ Sentencia 5/2002, de 14 de enero

⁷⁴ Sentencia 62/2007, de 27 de marzo.

un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos”.

No conformes con este argumento, expresaban la violación del artículo 14 al dar por hecho que permitir el aborto en caso de graves anomalías suponía una teoría eugenésica del nazismo. Sin embargo debatir sobre esta situación implicaba una restricción de la mujer a ese desarrollo de la personalidad, además de afectar a la esfera privada de la misma. Tanto las ya explicadas sentencias A, B, C vs Irlanda como la R.R vs Polonia afirmaban que no permitir un aborto en este tipo de situaciones infringían el artículo 8, relativo a la protección de la vida privada, del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Finalmente, en relación a la inseguridad jurídica creada por el concepto “anomalías fetales” alegado en el motivo tercero, al igual que ocurría con el término salud, no se indica solo este término, sino que se especifica que tienen que ser incompatibles con la vida o que “se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”. Por lo que hay un límite claramente establecido que no provoca que se pueda interrumpir el embarazo por cualquier causa. Asimismo, ya quedaba justificada la existencia de este supuesto en la reiterada STC 53/1985, que disponía *“El fundamento de este supuesto, que incluye verdaderos casos limite, se encuentra en la consideración de que el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. La afirmación anterior tiene en cuenta la situación excepcional en que se encuentran los padres, y especialmente la madre, agravada en muchos casos por la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan de modo significativo a paliar en el aspecto asistencial la situación, y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres acerca de la suerte del afectado”*⁷⁵

Pasamos ya al motivo quinto, en el cual se apela a la inconstitucionalidad del artículo 13.4 de la LO 2/2010 y disposición final segunda, por la violación de los artículos 15, 27.2 y 39.1 y 4 de la Constitución.

A la hora de analizar el recurso, ya dijimos que dicho apartado estaba suprimido. Bien es cierto que en un principio, antes de su derogación, este precepto fue desarrollado en el

⁷⁵ Fundamento jurídico 11, STC 53/1985, de 11 de abril.

Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Concretamente, en su artículo 8, se estableció el desarrollo del consentimiento informado de las mujeres menores de edad, siendo necesario que llevasen un documento que acreditase el cumplimiento del requisito de información, el cual tenía que ser entregado por la mujer y su representante legal.

En el caso del desconocimiento por el representante legal, el médico tendría que considerar si las alegaciones hechas son fundadas, y podría solicitar, en el caso, un informe psicológico, psiquiátrico o de un profesional de trabajo social.

Sin embargo, este desarrollo no fue suficiente, y con la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, se suprimió.

En ella se establecía “ *El que las menores de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus representantes legales, padre y/o madre, personas que ostenten la patria potestad o tutores, según proceda, es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo. No se trata únicamente de la protección de la menor, sino que su cuidado comprende el núcleo esencial de todas esas figuras jurídicas; y así lo fija el Código Civil, tanto en el artículo 154, estableciendo que entre los deberes y facultades del ejercicio de la patria potestad está el de «velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral», como en el artículo 269, que dispone que «el tutor está obligado a velar por el tutelado», y, en particular, «a educar al menor y procurarle una formación integral»*”.⁷⁶

Finalizando con el primer grupo de motivos, comentamos el motivo sexto, relativo a inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 19.2 de la LO 2/2010 por la vulneración de los artículos 16.1 y 2 y 18.1 CE.

En primer lugar, en relación a la inseguridad jurídica que crea los términos “personal sanitario directamente implicado”, al no estar especificado, se entiende que se refiere a todo el personal que vaya a proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Este concepto, ya antes de la promulgación de la Ley, la Sentencia de 13 de febrero de 1998,

⁷⁶ Exposición de motivos primero, Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo

en la que se responde a un recurso de suplicación interpuesto por parte del personal de un hospital con motivo de objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, lo concretó.

En ella, se expresa que *“La satisfacción del derecho fundamental, por lo tanto, comporta que no cabe exigir del profesional sanitario que por razones de conciencia objeta al aborto que en el proceso de interrupción del embarazo tenga la intervención que corresponde a la esfera de sus competencias propias; intervención que por hipótesis se endereza causalmente a conseguir, sea con autos de eficacia directa, sea de colaboración finalista, según el cometido asignado a cada cual, el resultado que la conciencia del objetor rechaza, cual es la expulsión del feto sin vida”*.⁷⁷ Es decir, que la objeción de conciencia comprende a todo el personal sanitario que intervenga en cualquier fase del proceso de interrupción, siendo estos por ejemplo, los anestesistas, enfermeros, ginecólogos etc...

En cuanto a la vulneración del artículo 16 CE al expresar que la objeción de conciencia se realizará siempre y cuando no se disminuya el acceso y la calidad de la prestación, la Sentencia antes mencionada también hace referencia a este supuesto y afirma que *“En consecuencia, son también actos sanitarios de cuya ejecución se encuentran jurídicamente exentos quienes ejercen frente al aborto voluntario el derecho fundamental a la objeción de conciencia, cual es el caso de los demandantes; sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad que incumbe al centro sanitario de procurar los medios humanos necesarios para que el servicio se preste, lo que nunca puede hacer empero a costa de sacrificar derechos fundamentales que la Constitución garantiza”*. Por ende, cabe entender, que lo que se pretende es la no vulneración del derecho que tiene la mujer a abortar como consecuencia de la objeción de conciencia, pero no por ello quiere decir que se limitará este último derecho para conseguirlo. Existe, por lógica, más personal sanitario en un hospital que sin objetar, podrá encargarse de la interrupción, lo que supondría la no vulneración de ninguno de los derechos mencionados.

Finalmente, también se alega una vulneración del artículo 18.1 CE al entender que dar una manifestación anticipada de la objeción de conciencia suponía una vulneración de la intimidad del personal sanitario.

⁷⁷ STSJ 85/1998, de 13 de febrero de 1998.

Sin embargo, ya en la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, para poder objetar conciencia se tenía que presentar una solicitud sobre la cual un Consejo Nacional decidiría aceptar o no. Pero además, al igual que entonces con la solicitud y ahora con una manifestación, no implica que el personal sanitario tenga que expresar los motivos por los cuales objeta conciencia, sin más fundamento que la información al Centro Sanitario.

Es lógico entender que se necesite una manifestación por parte del personal sanitario objetor antes de dicha intervención, puesto que el Centro Sanitario tiene que sustituirlo por otro que pueda hacerlo para así cumplir con las garantías necesarias y los derechos de la mujer embarazada.

En cuanto al segundo grupo de motivos, el séptimo y el octavo, alegan en primer lugar, la inconstitucionalidad del artículo 5.1 e) LO 2/2010 por la vulneración de los artículos 9.3, 16.1 y 20.1 c) CE, y la vulneración de los artículos 16.1, 20.1 c) y 27.10 CE por la inconstitucionalidad del artículo 8 *in limine* y letras a) y b) LO 2/2010.

Entre las alegaciones, se encuentra de nuevo la vulneración del artículo 9.3 CE por la inseguridad jurídica que genera el concepto “perspectiva de género”. UNICEF define este concepto diciendo que *“La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad”*⁷⁸. Se entiende por tanto, que la perspectiva de género será aquella categoría que de una enseñanza desde una perspectiva de igualdad entre géneros.

Además, la otra principal alegación del recurso es la vulneración de la libertad ideológica expresada en el artículo 16.1 por la vulneración de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza expresada en el artículo 27.10 CE.

Como ya es sabido, la libertad ideológica se relaciona íntimamente con la objeción de conciencia establecida en el artículo 30.2 CE. Ahora bien, está claro que la manera de poder regular esta libertad ideológica en este caso sería estableciendo una objeción de conciencia para aquellos alumnos, profesores o padres que no estuviesen de acuerdo con

⁷⁸ UNICEF “Perspectiva de Género” Comunicación , Infancia Y Adolescencia. Guía Para Periodistas

esa enseñanza. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con tal regulación, ni con ningún texto legal que permita llegar a un acuerdo entre este derecho y la necesaria educación sexual y reproductiva sobre todo en materia abortiva, por lo que creo que sería un requisito esencial tal legislación para poder concretar los artículos 5.1.e) y 8 *in limine* de la LO 2/2010. Si bien, la Sentencia alemana de 28 de mayo de 1993, la cual, aun optando por un sistema de protección del nasciturus, consideraba necesario una orientación, y por tanto, una educación.

Por tanto, en relación a estos motivos podemos concluir que:

PRIMERO.- El sistema de plazos establecido en la Ley Orgánica no es una invención del Estado, sino que sigue a lo establecido por las legislaciones europeas que mantienen una despenalización del aborto con una media de 12 semanas.

SEGUNDO.- Que la despenalización del aborto no supone como tal una vulneración del derecho a la vida en sentido estricto, sino un eficaz ejercicio de los derechos de la mujer embarazada. Ya se decía, y aquí reiteramos, que lo importante para que no se vulneren de manera excesiva estos derechos, es hacer una buena ponderación de los mismos, dentro del principio de proporcionalidad. Así, la ya mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 28 de mayo de 1993, expresaba, en su principio jurídico sexto que el Estado tendría que adoptar las medidas necesarias para una protección adecuada y eficaz, teniendo en cuenta los bienes jurídicos en conflictos. Señalaba que el concepto de protección tiene que conjugar medidas preventivas con medidas represivas.

Lo que está claro, es que no es factible el pleno desarrollo de un derecho sin la vulneración del otro, por lo que hay que llegar a un consenso que permita establecer cual debe prevalecer en el sentido de la importancia que se tenga, y en este caso, ha prevalecido los derechos de la mujer embarazada en los términos en los que no se vulnera en exceso el derecho a la vida al no queda concretado todavía, si el “nasciturus” queda dentro de este ámbito de protección y en qué medida.

TERCERO.- Tanto en la actualidad, como a lo largo de la historia, se ha intentado llegar a entender el concepto “persona” y que se comprende en él. Sin embargo, desde hace más de 100 años hasta ahora, se sigue sin llegar a un acuerdo sobre lo que entendemos por este concepto y lo que comprende el mismo, por lo que no se podrá llegar a entender del todo si hay una verdadera vulneración al derecho a la vida del no nacido o no, sin más

perjuicio que las opiniones y teorías de doctrina y jurisprudencia, que dentro de las cuales hemos especificado, se acercan más a una línea permisiva a favor del aborto.

CUARTO.- Que, el aborto no supone una obligación para las personas que han de practicarlo, pudiendo objetar conciencia todos aquellos que intervengan directamente en el proceso, sin más perjuicio que una comunicación previa con el objetivo de no injerir en los derechos de la mujer.

QUINTO.- Que la Ley Orgánica 2/2010 supuso un gran avance en el desarrollo de los derechos de la mujer, ampliando con creces lo dispuesto en el antiguo artículo 417 bis del Código Penal. Si bien, aunque ha establecido supuestos nuevos, ha tenido una gran influencia de lo antiguo y sobretodo de lo dispuesto en la STC 53/1985 en la que ya se dio la razón y se entendió legítima la interrupción voluntaria del embarazo.

SEXTO.- Que, existen términos y conceptos en los que se alegaba inseguridad jurídica y que bien es cierto que algunos tienen que ser desarrollados con más precisión. Asimismo, decir que se trata de una regulación novedosa y avanzada, y que no es una ley perfecta, pero que se puede ir modificando y adaptando al ámbito de protección de las libertades de las personas, tal y como se hizo cuando se derogó el apartado cuarto del artículo 13 de dicha ley, relativo al aborto por menores de edad en las edades comprendidas entre 16 y 17.

Cabe destacar que supondría necesario desarrollar los límites a la libertad de cátedra y de enseñanza y establecer lo que comprendería la educación sexual.

SÉPTIMO.- En definitiva ¿Cuál es la norma constitucional que ampara este derecho que tienen las mujeres a abortar y que tiene que ponderarse con el derecho de la vida?

Lo hemos venido desarrollando a lo largo de los motivos por los cuales se debería desestimar el recurso interpuesto por el Partido Popular, y es la dignidad y el desarrollo de la libre personalidad. A lo largo de toda la famosa y recurrida STC 53/1985 se ha ido hablando de la importancia de este derecho, de su respeto y de protección. Me parece importante resaltar lo anteriormente señalado en el preámbulo de la ley cuando dice *“La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Se señala que los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de*

quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información”. Ya lo expresábamos también cuando hablábamos de la protección de la esfera privada de la mujer, inherente a estos derechos.

OCTAVO.- Por todos estos conocimientos, y siendo conocedora de la dificultad que acarrea dar respuesta a algo tan delicado, considero que debería desestimarse el recurso.

Ahora bien ¿Qué sucederá en el futuro?

Habiendo pasado más de 8 años sin haberse dado respuesta, considero que darla ahora y además de manera negativa, estableciendo una prohibición del aborto, sería dar marcha atrás a una lucha constante de mujeres que quieren que sus derechos sean reconocidos.

Al margen de los movimientos feministas y de la despreocupación del Tribunal Constitucional por dar respuesta a esta materia, la Ley Orgánica 2/2010 supone un acercamiento a las políticas europeas que aseguran una permisión a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un sistema de plazos.

Y es que, ha quedado demostrado en la comparación con países con una regulación prohibitiva, que permitir el aborto implica un riesgo menor para la mujer, disminuyendo el número de abortos clandestinos así como las secuelas físicas y psíquicas que puede sufrir una mujer en un embarazo no deseado.

La importancia mantenida en la dignidad de la mujer a la hora de decidir sobre su futuro hace más relevante dicha ley, con el objetivo de la no vulneración de este derecho y del desarrollo libre de su personalidad.

Pero no todo es mantener la ley sin más, como ya he mencionado en unas líneas anteriores, queda mucho trabajo por realizar, en primer lugar, concretando conceptos difusos o inexactos, y en segundo lugar, desarrollando políticas en este ámbito tales como la educación o la información de manera exacta, y que no suponga ambigüedades o contradicciones.

Además, en este último ámbito mencionado, en la educación, creo que es importante que se establezca con claridad al ser uno de los puntos fundamentales para que se eviten embarazos no deseados así como agresiones sexuales y otro tipo de consecuencias anejas.

En conclusión, se trata de una materia que no ha llegado a su fin legislativo, queda mucho por hacer. Seguramente nunca se llegue a un acuerdo sobre lo que se entiende y entra dentro del concepto “persona”, y seguramente siempre habrá discusiones en este ámbito

al no estar todos de acuerdo sobre la ponderación de derechos hecha, pero posiblemente, con políticas adecuadas y desarrollos legales apropiados, se llegará a una protección eficaz que permita un eficaz ejercicio del principio de proporcionalidad y que suponga una verdadera protección tanto a los derechos de la mujer, como a los derechos del no nacido.

7.- BIBLIOGRAFÍA

- Bibliografía principal

IBÁÑEZ Y GARCÍA VELASCO, JOSÉ LUIS. *“La despenalización del aborto voluntario en el ocaso del siglo XX”*. Siglo XXI de España Editores S.A, Madrid. Diciembre 1998.

VIVES ANTÓN, TOMÁS SALVADOR., CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA., *“El debate acerca de la legalización del aborto”*. Tirant lo Blanch. Febrero 2012.

NOGUEIRA-DOMÍNGUEZ, JULIA *“Análisis de la legislación europea y española sobre salud sexual y reproductiva. Consecuencias de la reforma de la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”*. Fundación alternativas. 2014

LAURENZO COPELLO P., *“Dogmática y política criminal del aborto”*. Tirant lo Blanch, Valencia. 2012

LORENZO RODRÍGUEZ-ARMAS, MAGDALENA *“La ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Trabajos parlamentarios”*. Dykinson, Madrid. 2011.

ANDREU MARTÍNEZ, BELÉN *“La interrupción voluntaria del embarazo en la ley orgánica 2/2010: los supuestos en que se admite y la capacidad para consentir el aborto”*. *Revista jurídica de la región de Murcia*, N° 44. 2010. Págs. 1-21.

ASTOLA MADARIAGA, JASONE *“De la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo al anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada: buscando los porqués últimos de la supresión de derechos fundamentales”*. *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, n° 99-100. 2014. Págs. 465-492

CAPODIFERRO CUBERO, DANIEL “La evolución de la regulación del aborto en España: perspectivas teóricas y proyección normativa”. *Anuario Da Faculdade De Direito Da Universidade Da Coruña*, nº 20. 2017. Págs. 72-97.

“Aborto en Europa”. *Entre Nous La Revista Europea sobre Salud Sexual y Reproductiva*. Nº 59. 2005

JUDITH J. THOMSON, “Una defensa del aborto”, *James Rachels (ed.), Moral Problems, New York, Harper and Row*, 1979. Págs. 130-150.

COBO, ROSA., NOGUEIRAS, BELÉN.: “Teoría y acción política feminista en España en torno al aborto” *La Reforma del aborto en España. Perspectivas de un debate (re)emergente, Argentina, Católicas por el derecho a decidir*. 2014. Págs. 41-66.

NÚÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL Consentimiento y aborto en España reforma y contrarreforma (a la luz de la inmortal STC 53/1985). *Revista General de Derecho Penal*. Nº. 22, 2014

SALINERO ALONSO, CARMEN: “El aborto no punible en el ordenamiento jurídico español: la -casi eterna- respuesta a una incertidumbre”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 20. 2018

DÍAZ CABRERA, CELESTE: “El derecho fundamental a la vida. La interrupción voluntaria del embarazo. Aproximación a la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo”. *Revista Jurídica Canaria* nº 19. 2010. Págs. 5-20.

CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS., GONZÁLEZ CUSSAC, JOSÉ LUIS., “La nueva regulación penal del aborto”. [Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés](#), Vol.1. 2011. Págs. 443-460

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., DURÁN I FEBRER, M., ARNEDO SORIA, E., BEDOYA BERGUA, J.M., ... LAURENZO COPELLO, P., “Situación de la interrupción voluntaria del embarazo en España y Propuestas para una nueva Regulación”. *Informe del Comité de Personas Expertas sobre la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en España y Propuestas para una nueva Regulación*. Marzo 2009

SAURA ESTAPÀ, JAUME. “El estándar jurídico internacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo: reflexiones en perspectiva de derechos humanos”. *Revista electrónica de Estudios internacionales (REEI)*. Nº29. 2015.

LAURENZO COPELLO, PATRICIA “Desandando el Camino. La contrarreforma del Aborto”. *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2014, Nº. 16-09. Págs. 09:1-09:39.

RUANO ESPINA, LOURDES. “Comentario a la sentencia del tribunal constitucional de 11 de abril de 1985 sobre la despenalización de algunos casos de aborto”. *IUS CANONICUM*, XXV, Nº. II, 1985, Págs. 667-699.

RODRIGUEZ MOURULLO, G., “El aborto. La sentencia del Tribunal Constitucional español desde las perspectivas constitucional y penal”. *División de poderes e interpretación: hacia una teoría de la praxis constitucional*, Madrid, Tecnos, 1987. Págs. 186- 198.

GONZÁLEZ- VARAS IBÁÑEZ, ALEJANDRO. “Aspectos ético-jurídicos de la regulación del aborto en España. Estudio realizado a partir de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo” *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, Nº 23. 2010.

LÁZARO PULIDO, MANUEL “Mujer y realidad del aborto. Un enfoque multidisciplinar. Actas del I Congreso Internacional Multidisciplinar “Mujer y realidad del Aborto”. *Asociación Extremeña de Amigos del Foro Español de la Familia*. Cáceres. 2008

MIRANDA LUCAS, MARÍA JOSÉ; COMAS D’ARGEMIR, DOLORS: “Discursos de profesionales de la salud y de mujeres sobre el aborto voluntario”. *Revista de Bioética y derecho*, 2016, Núm 38. Págs. 37-53.

LANDROVE DÍAZ, GERARDO “La tímida despenalización del aborto en España” [Estudios penales y criminológicos, Nº. 10, 1985-1986](#), págs. 187-230

UMAÑA ALVARADO, TATIANA REBECA. “*La necesaria despenalización del aborto voluntario*”. Tesis doctoral. Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. 2016.

RUIZ SALGUERO, MAGDA TERESA “La regulación de la fecundidad: un estudio demográfico de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y el tratamiento de la esterilidad en España”. *Universidad Autónoma de Barcelona. Centro de Estudios Demográficos. Bellaterra, marzo de 2.002.*

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS “La reforma penal española de 1983”. (Informe). *Nuevo Foro Penal*, 12(27), Págs. 62-65

Informe del Consejo de Estado del 17 de noviembre de 2009.

REY MARTÍNEZ, FERNANDO “¿Es el aborto un derecho en Europa? Comentario de la sentencia «A, B y C vs. Irlanda», del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. *Pensamiento Constitucional Año XVI N° 16*. Págs. 743-752

CHIAPPARRONE, NORMA GRACIELA “El derecho al aborto en América Latina y el Caribe”. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas*, 3, 2018, págs. 192-223

FERNÁNDEZ CEDIEL, MIRIAM CRISTINA; CORTÉS ROBERTO “Exploración de los Derechos Sexuales y Reproductivos: conceptos y Elementos Claves” *Revista Entornos*, Vol. 30, N° 2, 2017, págs. 51-65.

LAMAS MARTA “Género, desarrollo y feminismo en América Latina”. *Pensamiento iberoamericano, N° 0*, 2007, págs. 133- 152

FUGALI MILIONE, CIRO “Algunas reflexiones en torno a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. *Documentos de trabajo (Centro de Estudios Andaluces), Serie 3, N°. 1, 2011*, págs. 1-47

CREVILLÉN VERDET, PABLO “Los derechos reproductivos en la legislación española” *Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid* en 2014.

- PRENSA

”La ley del aborto en Europa: predominan los plazos y solo un país lo prohíbe expresamente”. *20 minutos*. 20 de diciembre de 2012

“El aborto ya es legal en Irlanda”. *El País*. 14 de diciembre de 2018

“Solo El Vaticano, Malta y Andorra prohíben el aborto en Europa”. *COPE*. 25 de mayo de 2018.

“Aborto en El Salvador: absuelven a Evelyn Hernández, la joven que dio a luz a un bebé muerto tras ser violada”. *BBC News Mundo*. 20 de agosto de 2019

“Aborto en Nicaragua: 12 años de lucha por el derecho a decidir”. *El Confidencial*. 26 de noviembre de 2018.

Aborto en Honduras: qué es La Línea, el servicio clandestino de información telefónica sobre interrupción del embarazo que desafía al gobierno”. *BBC News Mundo*. 14 de agosto de 2019

“El macrismo más conservador gana la pelea interna sobre el aborto”. *El País*. 22 de noviembre de 2019.

“Aborto en Ecuador: el Parlamento rechaza la reforma legislativa para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación”. *BBC News Mundo*. 18 de septiembre de 2019

“Chile aprueba la despenalización del aborto en tres causales en histórica decisión”. *BBC Mundo*. 21 de agosto de 2017.

UNICEF “Perspectiva de Género” Comunicación, Infancia Y Adolescencia. *Guía Para Periodistas*

- ***Legislación***

Código Penal de 1932

Constitución Española de 1978

Decreto de Regulación de la Interrupción Artificial del Embarazo, de 25 de diciembre de 1936

Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal

Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal.

Convenio Europeo para la protección de los derechos y libertades fundamentales, relativo a la prohibición del maltrato y el respeto a la vida privada y familiar.

Resolución 1607/2008 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 16 de abril.

Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis CP de 1983

Código Penal de 1995

Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada de 20 de diciembre de 2013.

- ***Páginas web***

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.2 en línea]. <https://www.dle.rae.es>

<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=15&tipo=2>

<http://www.rtve.es/noticias/20150218/leyes-del-aborto-espana-ley-supuestos-1985-plazos-2010/828240.shtml>

- ***Jurisprudencia***

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 25 de febrero de 1975,

Sentencia 53/1985, de 11 de abril.

Caso R.R vs Polonia (Nº 27617/04). Sentencia de 26 de mayo de 2011

Caso A,B y C vs Irlanda (Nº 25579/05). Sentencia de 16 de diciembre de 2010

Auto 90/2010 de 14 de julio de 2010

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4523-2010, en relación con diversos preceptos de la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán BVerfGE 7, 198.

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 28 de mayo de 1993

STSJ 85/1998, de 13 de febrero de 1998

Sentencia 62/2007, de 27 de marzo.

Sentencia 5/2002, de 14 de enero